

LA HOMONIMIA Y SUS IMPLICACIONES LEGALES EN COLOMBIA

JOSÉ ANTONIO LÓPEZ BARBOSA



UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC

FACULTAD DE DERECHO

BARRANQUILLA

2019

LA HOMONIMIA Y SUS IMPLICACIONES LEGALES EN COLOMBIA

JOSÉ ANTONIO LÓPEZ BARBOSA

**TRABAJO DE GRADO PRESENTADO COMO REQUISITO PARA OPTAR AL
TÍTULO DE ABOGADO**

TUTOR: OMAR SANDOVAL FERNÁNDEZ

COTUTOR: MILTON ARRIETA LÓPEZ



DIRIGIDO AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE DERECHO

UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC

BARRANQUILLA

2019

Resumen

Este trabajo se basa en un análisis que se realiza sobre la Homonimia en Colombia, las consecuencias e implicaciones que puede tener una persona por tener nombre parecido o igual a otra. Se hace un estudio detallado sobre el caso de Homonimia con el ánimo de aportar de manera clara y precisa basados en derecho y la normatividad actual colombiana. Se desarrolla el trabajo con unos objetivos los cuales son analizar, identificar el marco jurídico e indicar las diferentes implicaciones y por ultimo determinar la responsabilidad y consecuencias de la Homonimia en el estado colombiano. Este trabajo de grado se realiza por el caso real sucedido al autor de este estudio jurídico (Jose Antonio Lopez Barbosa) quien por sus datos de identificación como ciudadano e igual nombre de una persona con antecedentes penales por tráfico de estupefacientes se produce un daño colateral en contra de su buen nombre que lo afecto no solo en lo personal y lo social, sino también en lo jurídico. Con esta investigación de la Homonimia y sus implicaciones legales en Colombia se hace un aporte al vacío jurídico que tiene el ordenamiento de la normatividad actual y se realiza una propuesta en derecho comparado donde leyes extranjeras ya están regulando este tipo de fenómenos.

Palabras clave: Homonimia, implicaciones legales, estupefacientes, daño colateral

Abstract

This work is based on an analysis of Homonymy in Colombia, the consequences and implications that a person may have for having a name similar or equal to another. A detailed study is done on the Homonymy case with the aim of providing in a clear and precise manner based on current Colombian law and regulations. The work is developed with some objectives which are to analyze, identify the legal framework and indicate the different implications and finally determine the responsibility and consequences of Homonymy in the Colombian state.

This degree work is carried out by the real case happened to the author of this legal study (Jose Antonio Lopez Barbosa) who, due to his identification data as a citizen and the same name of a person with a criminal record for drug trafficking, collateral damage occurs in against his good name that affected him not only personally and socially, but also legally. With this investigation of Homonymy and its legal implications in Colombia, a contribution is made to the legal vacuum that the current regulations have in place and a proposal is made in comparative law where foreign laws are already regulating this type of phenomenon.

Keywords: Homonymy, legal implications, narcotics, collateral damage

Contenido

Lista de tablas.....	6
Introducción.....	7
1. Planteamiento del problema.....	8
1.2 Formulación del problema	10
1.3 Objetivos.....	10
1.3.1 Objetivo general.	10
1.3.2.1 Objetivos Específicos.	10
1.4 Justificación del problema	10
1.5 Delimitación del problema	13
Capítulo II.....	14
2. Marco de referencia.....	14
2.1 Marco Teórico.....	14
2.2 Bases teóricas	18
2.2.1 Teorías que determinan la naturaleza jurídica del nombre.	19
2.5 El Procedimiento de declaración de homonimia	35
2.6 Marco legal	41
Capítulo III	54
3. Metodología completa.....	54
3.1 Tipo y enfoque de investigación	54
3.1.1 Tipo de investigación.	54
3.1.2 Enfoque de investigación.....	54
3.2 Procedimiento metodológico	55
3.3 Recursos.....	56
3.3.1 Materiales.....	56
Tabla 1. Materiales.....	56
3.3.2 Humanos.....	57
Tabla 2. Recursos humanos	57
3.3.3 Cronograma de Actividades.	58
3.3.4 Presupuesto.....	59
Referencias	68

Lista de tablas

Tabla 1 Materiales.....	56
Tabla 2 Recursos humanos.....	57
Tabla 3. Cronograma de actividades.....	58
tabla 4. Presupuesto del trabajo	59

Introducción

Cuando diferentes personas tienen nombres iguales o parecidos, los actos realizados por uno de ellos pueden afectar directa o indirectamente en la vida cotidiana de los otros, sin que estos últimos hayan intervenido en la producción de dichos sucesos y sus correspondientes resultados.

En este sentido, las consecuencias de las acciones realizadas por una persona, recaídas en forma directa o indirecta, en la vida de otras, pueden ocasionar beneficios y/o perjuicios, los cuales quedan supeditados a que dichas actividades se desarrollen en observancia de la ley o al margen de ella.

Dado el caso real, sucedido al autor de este estudio jurídico (José Antonio López Barbosa), ciudadano barranquillero, del Caribe colombiano, quien por sus datos de identificación como ciudadano y su parecido o similitud del nombre de una persona con antecedentes penales por narcotráfico, al estar esta persona sindicada de realizar actividades al margen de la ley, se produce un daño colateral en contra del buen nombre del investigador, pues por dicho cuestionamiento (por este caso denominado homonimia), afectó no solo en lo personal y lo social de esta persona, sino también en lo jurídico. Circunstancia particularmente que motiva la realización del presente trabajo.

Por ello, en este trabajo de grado, se hace un estudio detallado sobre caso de homonimia en Colombia, con el ánimo de aportar de manera clara y precisa, pero apegados en todo momento al derecho, sobre su aplicabilidad, características, procedimientos y demás normatividad que lo sustentan, para su uso como material de consulta, por parte de profesionales y/o estudiantes del derecho, interesados en el tema.

Capítulo I

1. Planteamiento del problema

El nombre en las personas es uno de los principales atributos por medio del cual se puede identificar ante un registro de habitantes concreto. Es decir, el reconocimiento y la identificación de las personas a través del nombre es uno de los derechos fundamentales que tiene un ciudadano, el cual debe ser protegido y respetado por el Estado de cualquier intento de daño jurídico o legal. Sin embargo, en ocasiones las personas se ven perjudicadas por el uso de sus nombres en acciones que resultan nocivas o incluso beneficiosas, a este fenómeno se le conoce con el nombre de homonimia.

La homonimia consiste en la situación en la que un individuo puede ser confundido con otro que posea el mismo nombre, ya sea en beneficio o perjuicio, originando errores al momento de la identificación. Para Cabanellas (2009) este término se aplica a personas, cosas u objetos de igual nombre (p.13). Esto quiere decir que cuando los nombres tienen grandes similitudes o incluso es el mismo, las personas pueden verse implicadas en diversos procesos judiciales causándoles perjuicios jurídicos, económicos, políticos y sociales puesto que se ven inmersos en procesos civiles y penales teniendo que comparecer ante la justicia.

En la actualidad esto se ha convertido en una problemática que afecta a muchos ciudadanos colombianos quienes se han visto envueltos en problemas de reconocimiento de identidad que implica múltiples aspectos legales. En el Artículo 15 de la Constitución Política colombiana se reconoce el derecho al buen nombre y habeas data como parte fundamental de la vida de las personas:

“Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en los bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución”. (Procuraduría General de la Nación, 2016, p.1)

Como puede observarse cuando se dan casos de homonimia se está atentando contra la honra y el buen nombre de los ciudadanos, “estos casos pueden darse sobre todo cuando hay una orden de captura, condena o en procesos civiles, comerciales y políticos”. Cuando no se identifica completamente a la persona, al momento de imponer las medidas, se atenta inclusive contra el derecho al honor y al buen nombre, ya que, al ser detenidos, se publica por la prensa el supuesto acontecimiento delictivo y por tal razón son discriminados por la sociedad, e inclusive le dificulta reintegrarse a vida cotidiana (Sánchez, 2015, p.2).

Este tipo de casos refleja la debilidad en los sistemas de control jurídico en Colombia que actualmente se manejan en el nivel judicial afectando derechos de las personas al ser confundidas dañándoles su honra y su buen nombre entre otros derechos como gozar de plena libertad, causando daños económicos, psicológicos, y familiares, al verse inmersos en procesos judiciales, sin tener responsabilidad alguna. Esto se debe en muchas ocasiones a que no hay controles adecuados en la diversas de formas de escribir y pronunciar un nombre, lo que provoca que de forma involuntaria o mal intencionada (de algunos funcionarios públicos), se incurra en errores que tienen incidencia jurídica.

La falta de mecanismos legales o la omisión de los mecanismos existentes que regulan la plena identificación de las personas promueven la proliferación de homónimos, lo cual se agrava al no existir un parámetro adecuado que establezca los elementos secundarios que permitan la eficaz identificación de las personas. Esto demuestra que la homonimia es una situación que debe ser regulada por el ordenamiento jurídico ya que genera una serie de problemas en distintos asuntos de índole legal para los individuos involucrados en esta problemática.

1.2 Formulación del problema

Para continuar con el desarrollo normal de este trabajo documental, se hace necesario plantear y resolver el siguiente interrogante:

¿Cuáles son las implicaciones legales de la homonimia en Colombia?

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo general.

Analizar las implicaciones legales de la homonimia en Colombia.

1.3.2.1 Objetivos Específicos.

- Identificar el marco jurídico de la homonimia en Colombia.
- Indicar las diferentes implicaciones que se presentan en los casos de homonimia en Colombia.
- Determinar la responsabilidad y consecuencias de la homonimia en Colombia.

1.4 Justificación del problema

Actualmente la homonimia es una problemática que afecta a los colombianos ya que con el paso del tiempo han ido aumentando los casos en el país, por ejemplo, en el 2017 el periódico El Tiempo relató el caso de Johana Milena Ospina Torres, ingeniera civil, quien por un

homónimo tuvo que enfrentar los 11 días más amargos y tenebrosos de su vida. El drama empezó en el aeropuerto El Dorado cuando su nombre coincidió con el de otra mujer a quien un juez de Medellín le había dictado orden de captura por secuestro extorsivo cuando tendría 16 años (s.p.).

Así mismo, está el caso del investigador quien alrededor del año 2016 estuvo envuelto en un caso de homonimia ya que para el 2011 el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Buga había generado una orden de captura por el tráfico de estupefacientes. Sin embargo, tras el proceso el acusado decidió realizar una acción de tutela con el fin de esclarecer los hechos pues su cedula no coincidía con la persona buscada. De este modo, las entidades involucradas como el Departamento de Policía Valle SIJIN constataron que al respecto hubo error, el cual procedió a corregir, por lo que en la actualidad aparecen con asuntos pendientes con las autoridades judiciales.

Con el caso solucionado, el investigador por medio del Radicado No 86036 como respuesta a la Sentencia T-7863/16 (ver anexo No. 2), hace énfasis en el hecho de que este tipo de errores en el sistema penal afecta de manera importante la vida de las personas ya que, según la Corte, tienen la potencialidad de generar consecuencias adversas para las personas, como la adquisición de un trabajo, así como el acceso a cargos públicos o de elección popular. En el caso del investigador, este se vio afectado por el hecho de que esto le impidió que integrara la lista de elegibles conformada por el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia en el 2015, lo que le generó:

Un daño consumado frente a sus derechos a la honra, al buen nombre, a elegir y a ser elegido; precisamente porque la supuesta condena existente en su contra, lo obligó a retirarse de

las elecciones, aunque había obtenido el aval para participar. Daño que, como es evidente, no estaba en la obligación de soportar, ya que se vio expuesto a un señalamiento público indebido; a tener que renunciar al aval otorgado para integrar la lista de candidatos a la Junta Administradora Local de la Comuna Norte Centro Histórico de Barranquilla; y a no poder ejercer sus derechos civiles a través de su participación en la actividad política (Corte Suprema de Justicia, 2016, p.13).

Es decir, este tipo de errores en el sistema afecta de múltiples formas a las personas, por esto el accionante expone que es primordial que la Policía Nacional se abstenga de incurrir en este tipo de irregularidades vulneradoras de los derechos fundamentales de los ciudadanos, a través de un estudio más cuidadoso y preciso de la información de las personas evitando este tipo de errores. En ese sentido, con la investigación se pretende abordar la problemática de la homonimia y las implicaciones legales que tiene en Colombia, ya que esta termina afectando los derechos fundamentales de las personas. Tal y como es el caso del investigador

Esto se llevará a cabo con el fin de describir concretamente la responsabilidad legal que genera la homonimia para los colombianos y de exponer que es necesario que haya controles y autoridad sobre este tipo de problemáticas con el fin de evitar fallas tan graves que pueden llevar a una persona a prisión sin tener culpa alguna. Esto debido a que la homonimia es una figura que puede afectar a cualquier persona sin importar su sexo, nivel social, económico o ideologías.

De este modo, a través del desarrollo de la investigación se podrá precisar y hacer evidente el vacío legal que trae la homonimia para la sociedad en general, como es el caso puntual de los colombianos, ya que esta problemática afecta cada vez más el contexto social puesto que no se han tomado las medidas judiciales, civiles, penales, notariales y administrativas

necesarias de las que debe encargarse el Estado. En este sentido, la investigación aporta un análisis jurídico para el campo de derecho en materia penal y civil ya que se exponen bases sólidas para el control de la homonimia. Además de aportar a la disminución de los errores a la hora de la identificación plena de una persona evitando un daño jurídico.

1.5 Delimitación del problema

1.5.1 Espacial: La investigación tendrá como objetivo los casos en los que se ha dado la homonimia en Colombia, analizando sentencias proferidas en los distintos circuitos. Todo esto con el fin de enlistarlos y hacer un análisis de este tipo de situación donde una persona tiene el mismo nombre de otra persona.

1.5.2 Temporal: la investigación cubre un periodo de 2008 hasta 2018, ya que es un lapsus de tiempo considerable en el que se pueden encontrar algunos de esos casos, para así poder observar el papel del estado en este tipo de situaciones donde se atenta contra la integridad y el buen nombre de las personas implicadas.

1.5.3 Jurídica: La delimitación jurídica del anteproyecto, está determinada por el Código Civil Colombiano, expedido mediante la **Ley 57 de 1887**, la **Ley 25/92**. El **Decreto 1260** del **27 de Julio de 1970** (*Por el cual se expide el Estatuto del Registro del Estado Civil de las personas*).

Capítulo II

2. Marco de referencia

2.1 Marco Teórico

2.1.1 Antecedentes.

Con el desarrollo del presente apartado, se estaría dando respuesta al segundo de los objetivos específicos propuestos en el presente trabajo, toda vez que se muestran en detalle, los casos conocidos sobre el tema en cuestión.

En la homonimia ha representado un tema de estudio que ha despertado el interés de la academia del derecho ya que esta se puede presentar en cualquier escenario y puede afectar a cualquier persona que tenga un nombre similar a otro. De este modo, tras una revisión bibliográfica se hallaron algunas investigaciones que han tenido por objeto de estudio las implicaciones que tiene la homonimia en cada uno de los contextos de los que parten. A continuación, se presentan algunas de estas:

En 2011, Cumbajin (2011) dirigió una investigación que tenía como objetivo realizar un estudio crítico, jurídico y doctrinario del Régimen Procesal Ecuatoriano en cuanto a la vulneración del derecho a la identidad individual cuando existe confusión con personas homónimas, para finalmente crear una ley de homonimia para Ecuador. Esto debido a que en la Constitución de este país se establece este derecho, pero no hay una manera adecuada para su cumplimiento ya que muchas personas se ven afectadas por este problema al tener un homónimo con personas que han sido requeridas por la autoridad y como no hay una ley procesal que guíe y regule este problema. Para esto se empleó el método científico, a través de tres etapas primero por medio observación se recopiló la información teórica sobre el marco conceptual y jurídico,

en segunda instancia se hizo el análisis sobre los aspectos sociales y jurídicos del derecho a la identidad individual y la inexistencia de regulación efectiva en una ley. Finalmente se logró realizar una propuesta de Ley de Procedimientos de Homonimias en el Ecuador que efectivice el ejercicio de este derecho por sus titulares.

En el 2012, Villagran (2012) desarrolló una investigación que tenía como fin abordar la problemática de la homonimia desde su conceptualización teórica para plantear una solución más viable para subsanar los diversos inconvenientes que se observan en la actualidad en Guatemala, modificando la normativa existente e introduciendo reformas que permitan contar con un mecanismo uniforme para diferenciar con certeza jurídica a aquellas personas que cuenten con el mismo nombre. Para esto se hizo uso de técnicas como la recopilación bibliográfica y el análisis doctrinario sobre la normativa actual en relación a la problemática. Luego de una descripción conceptual sobre las personas naturales y jurídicas, y el análisis de los derechos básicos del ser humano regulados en la Constitución política de este país, finalmente la autora se desarrolla la homonimia desde su definición ontológica hasta la sintetización de los principales aspectos que en la actualidad genera dicha problemática, ante un vacío legal que se vuelve recurrente en la práctica de las distintas diligencias judiciales, notariales o administrativas que se realizan ante las distintas instituciones del Estado.

Así mismo, en 2015 Sánchez (2015) desarrolló una investigación que tenía por objeto principal elaborar un informe jurídico tendiente a demostrar los daños y perjuicios ocasionados a los ciudadanos por la falta de verificación de los datos completos de los procesados, al emitir medidas cautelares personales y reales realizadas por los servidores judiciales, ante la figura del homónimo en la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas en Guatemala. Para esto se hizo uso de una metodología de carácter descriptivo y bibliográfico, a través de técnicas como el

fichaje, observación directa, encuesta y entrevistas. Dentro de los resultados hallados se refleja las necesidades que tienen la ciudadanía ante la figura del homónimo, puesto que está ocasionando problemas legales a personas inocentes, por la falta de precaución al momento de la expedición de medidas cautelares personales y reales. Los daños a los que se exponen las personas son perjuicios laborales, económicos, jurídicos, que afectan ante la figura del homónimo, de este modo al Estado ecuatoriano se le recomienda que cumpla su papel de proporcionar de seguridad jurídica a la ciudadanía, y por ello tomara las medidas necesarias por el surgimiento de la figura del homónimo.

En este sentido, es posible observar que la homonimia en el marco de la legalidad es una problemática que se extiende por el mundo ya que cada vez más investigadores se interesan en ahondar más en el tema y brindar soluciones prácticas para que los sistemas judiciales tomen cartas sobre el asunto. Ya que como se observó, muchas de las constituciones protegen a las personas ante este tipo de delitos, pero no les brindan mecanismos reales de aplicaciones y prevención en este tipo de casos, haciendo que las personas se vean realmente afectadas en todos los aspectos de sus vidas.

Existe también, el Derecho a la información, a la luz de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la corte sentenció que el derecho a la información, es un derecho de doble vía, tal como lo citan la ONU (1948). Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas (...) (Organización de las Naciones Unidas, 1948)

Esta es la base o fundamento de toda jurisprudencia, de un Estado Social de Derecho, que verse sobre el derecho a la información; es más, es necesario que en un Estado Social de Derecho se le dé paso o se vincule este derecho a su ordenamiento jurídico:

Los ordenamientos constitucionales de la mayoría de los estados modernos, tal como sucede en el nuestro, parten del supuesto de que la comunicación es inherente a la estructura social y política y que tan solo dentro de un concepto amplio, que reconozca de manera generosa el ejercicio de la libertad para hacer uso de los canales que la hacen posible, puede hablarse de un estado verdaderamente democrático.

Esto corresponde a una necesidad sentida de los pueblos y a una instintiva reacción contra las posibilidades de actos que tiendan a recortar o a anular el ejercicio de la libertad. (Corte Constitucional, 1992)

Ahora bien, se debe recordar que para el caso que nos ocupa, los medios de comunicación no pueden sacar a la luz pública informaciones de ciudadanos que como en el ejemplo aquí tratado de homonimia, no se haya verificado previamente o tenga un pronunciamiento oficial de parte de los jueces que conozcan el caso.

Derecho a la honra. El término honrar tiene su origen en el latín. Proviene de honoro, honoras, honorare, honoraui, honoratum. Este verbo está relacionado con la palabra honos, honoris cuyo significado es el premio que, en Roma, se le daba a quien se lo suponía justo, íntegro. Ese premio era otorgarle un cargo político. De esta manera, puede decirse que este vocablo señala el concepto de tratar con distinción a alguien, gratificar.

Para la Real Academia Española la definición que está directamente relacionada con su etimología es: “respetar a alguien”, “enaltecer o premiar su mérito”; “dar honor o celebridad”.

Constitucionalmente este derecho se encuentra amparado en el art. 21 del libro normativo concordante con el artículo 85, pues el constituyente en pro de garantizar el derecho a la honra deja señalada su forma de protección a través de la Ley. Indica la Sentencia T- 411/1995 que la honra es un derecho que debe ser protegido con el fin de no menoscabar el valor intrínseco de los individuos frente a la sociedad y frente así mismo, lo cual garantiza la adecuada consideración y valoración de las personas frente a la sociedad. En esta sentencia se especifica que, aunque el concepto de honra tiende a confundirse con honor se debe hacer la aclaración que honor hace referencia a la apreciación propia que el ser humano tiene de sí mismo sin importar el concepto que la opinión ajena, mientras que por otro lado la honra, hace referencia a ese concepto externo que la sociedad tiene de nosotros.

La sentencia T-437 de 2004, expresa que:

Grande es ciertamente la importancia de este derecho porque el hombre necesita que la opinión social dé apoyo cierto a sus valoraciones de sí mismo, a la prudente evaluación de su persona y al justo orgullo que le permite llevar una vida importante y significativa, a más de que la imagen que se tenga de él determina en alta medida el trato que se le dá por los demás, (Sentencia T-437 de 2004).

Esta sentencia incluye en unos de sus apartes que la vulneración de un derecho fundamental se encuentra ligado con la violación de los otros derechos tales como el Derecho a la Igualdad y el Libre Desarrollo de la Personalidad.

2.2 Bases teóricas

Dentro de las categorías que se tomarán como base teórica para el desarrollo de la investigación se encuentran la homonimia y sus implicaciones legales como marco principal. De este modo, a continuación, se describe conceptualmente esta categoría de estudio a través de un

análisis desde el ámbito académico del derecho, así como desde el campo judicial en el contexto del Sistema Penal Colombiano.

2.2.1 Teorías que determinan la naturaleza jurídica del nombre.

Se ha controvertido en la doctrina respecto de la naturaleza jurídica del nombre de las personas físicas. Han sido diversas las teorías que han tratado de explicar tal naturaleza, sin que se haya alcanzado una aceptación general de alguna de ellas, describiéndose a continuación las más relevantes.

✓ Teoría del nombre como derecho subjetivo o interés jurídicamente protegido.

Al respecto, Rojina Villegas R. (2008), sostiene que: "El nombre es un derecho subjetivo de carácter extrapatrimonial, no es valorable en dinero, ni puede ser objeto de contratación; siguiendo a Ihering, los derechos subjetivos son intereses jurídicamente protegidos y es indudable que el nombre encaja en esta disposición porque no solo cumple las finalidades personalísimas del sujeto y se le protege no solo en función de sus fines individuales, sino también representa intereses generales que es necesario proteger" (Rojina Villegas Rafael, 2008. Pág. 171).

✓ Teoría del nombre como derecho de la personalidad

Desde esta perspectiva, se señala que no basta decir, que el nombre constituye un derecho subjetivo o un interés jurídicamente protegido, pues son innumerables los derechos, ya sea de carácter público, privado, patrimonial o extra patrimonial.

Una importante corriente doctrinal establece que el nombre constituye un bien jurídico que pertenece al individuo, un derecho subjetivo de carácter privado y solo se discute la naturaleza de este derecho, tratándose no solo de la individualización de la persona mediante su nombre civil, sino también

de una suerte de emanación de la propia personalidad, como lo son todos los derechos que yacen en el ser mismo del hombre. (Casthn Tobeñas, José. Ob. Cit. Phg. 134)

✓ **Teoría del nombre como derecho de propiedad**

"Desde un punto de vista jurídico, la jurisprudencia francesa había venido sosteniendo que el sujeto tenía un derecho de propiedad sobre su nombre, así que podía accionar en juicio para que no se hiciera uso de su nombre por terceros, se le indemnizara por la usurpación y cesará cualquier acto por el que se le tratara de impedir el uso pacífico de su nombre, características de la propiedad patrimonial" (Rojina Villegas Rafael, 2008. Pág. 171)

."A pesar de la utilidad hallada en esta postura, han sido innumerables las críticas, porque se dice que una propiedad ordinaria es alienable y prescriptible, mientras que el nombre es indudablemente lo contrario" (Rojina Villegas Rafael, 2008. Pág. 172).

La propiedad es de orden patrimonial y admite una evaluación pecuniaria lo que evidentemente no es verdadero respecto al nombre de las personas.

✓ **Teoría del nombre como institución de policía**

"Para Marcel Planiol, el nombre es para la persona que lo lleva una obligación, más que un derecho y sostiene que se trata de una institución de policía civil, por ser la forma obligatoria de la designación de las personas, pero no es un objeto de propiedad como tampoco lo son los números de matrículas. En ese sentido, el nombre no es enajenable, la ley no lo pone a disposición de quien lo lleva y más que en interés particular se establece en interés general".

Para hacer notorio el hecho de la filiación, la ley exige que este hecho se anuncie mediante la identidad del nombre, lo que excluye toda idea de propiedad. Desde esta perspectiva el nombre se ha considerado como un deber de política administrativa.

En la actualidad, la obligación del estado de velar por sus ciudadanos se ha expandido cada vez más, pues son muchos los mecanismos que usan las personas para aprovecharse de las situaciones y cometer múltiples delitos, tal y como es el caso de la figura del homónimo. En su sentido más simple y sencillo, la homonimia puede entenderse como la igualdad o semejanza en cómo se nombran las cosas o las personas, es decir esta estudia la forma de describir dos cosas o nombres iguales pero que en el fondo no son iguales. Según Ixpata (2009, citado por Sánchez, 2015).

En este apartado, cabe citar a Cadrazco (2010.), quien considera que , el derecho a la información como pilar del estado de derecho, tuvo su auge a partir de la década de los noventa, donde comenzó un proceso de consolidación democrática, para toda Latinoamérica, el que se sustentó en una serie de reformas constitucionales o la elaboración de nuevos contratos sociales, rebautizando a los Estados, como “Estados Sociales de Derecho”, poniendo por encima de las leyes al individuo y dándole prelación a la Defensa de los Derechos y Garantías Individuales como mecanismo para avanzar en un proceso de Democratización y de aplicación de la Democracia Participativa. (Cadrazco, 2010, p. 36).

En este sentido Colombia no fue ajena a este fenómeno social de “actualización” jurídica de la época. Lo cual da pie para que todo ciudadano colombiano que se sienta vulnerado en su buen nombre, invoque el estado de derecho y proceda a realizar los trámites necesarios para buscar el reparo del daño en el que se ve involucrado.

Para ello, el ciudadano afectado le asiste todo su derecho para recurrir entre otras, a los medios de comunicación que, por cumplimiento de su función pública, pudo mostrar la nota periodística como una noticia, para que se rectifique tanto en el medio donde inicialmente se presentó la nota, como la sección donde se publicó inicialmente la nota, que dañaba la imagen del ciudadano.

En este sentido, el Estado Social de Derecho cuenta con muchas garantías y derechos que lo fundamentan para propender a la protección de la dignidad humana y de igual manera busca mantener estable el balance del poder público. Dentro de estas formas de protección se tiene el derecho a la información; este derecho cobra importancia porque, al citar a Vargas (2009, p. 224):

“El derecho a la información tiene un profundo asidero en principios y valores inherentes al Estado Social de Derecho como lo es la participación ciudadana efectiva y directa sobre los asuntos públicos”. Dicho derecho en la actualidad lo han acaparado en gran medida los medios de comunicación masivos que, a través de las nuevas tecnologías,

Actúan como sistema de transmisión de mensajes y símbolos para el ciudadano medio y se encargan de hacer llegar la información a todo el mundo. Su función es la de divertir, entretener e informar, así como inculcar los valores, creencias y códigos de comportamiento que les harán integrarse en las estructuras institucionales de la sociedad. (Chomsky & Herman, como se citó en Pineda, 2001, p. 193)

Tanto es así el papel de los medios que “todo lo que sabemos sobre nuestra sociedad, nuestro mundo, lo sabemos a través de los medios de comunicación” (Vellaspín, como se citó en López, 2001, p. 72).

Esta influencia diaria en la vida de las personas ha permitido, como lo expuso en el encuentro del Grupo Barritz, en octubre de 2004, en la ciudad de Costa Rica, la organización Newlink Political Consulting & Research: “Los medios han contribuido a legitimar las demandas de grupos de la sociedad civil. Algunos inclusive argumentan que los medios de comunicación se han convertido en agentes de desestabilización” (p. 5).

2.4. La Homonimia

2.4.1 Definición.

No se ha precisado una definición al respecto, pero puede establecerse de la simple observación del fenómeno, que la homonimia es la similitud de nombre tanto de objetos como de personas, cuya coincidencia puede ser gramatical o fonética, pero que necesariamente tienen significados diferentes.

Los homónimos designan a personas o cosas que tienen un mismo nombre, y son palabras que, siendo iguales por su forma, tienen distinta significación. Semánticamente se deriva de la palabra latina homo, que significa semejanza o igualdad.

La homonimia es la relación semántica que se establece entre dos palabras cuando estas presentan identidad formal, fónica o gráfica, pero diferencia en el significado.

Dentro de este concepto, se estudian los homónimos tratando su diferencia, aunque las palabras o cosas sean nombradas como iguales; es decir, que, aunque sean iguales tienen una diferencia entre ellas.

En su sentido más amplio, homónimo es igualdad entre cosas o nombres, bien sea, una semejanza entre dos o más nombres o cosas; es la forma de describir dos cosas o nombres iguales pero que en el fondo no significan lo mismo.

2.4.2 Clases de homonimia.

Como ya fue señalado, la homonimia se refiere básicamente a la igualdad descriptiva y fonética de dos o más cosas; pero que representan o significan conceptos distintos en su totalidad.

Atendiendo a criterios esbozados en otras legislaciones, los homónimos se pueden distinguir desde dos puntos de vista:

- a) Relación entre nombres personales; y,
- b) Relación entre cosas.

En ambos casos, la especificación de las características de cada objeto, determinan el factor diferenciador y aclaran el significado o la identificación requerida.

✓ Relación entre nombres personales.

Entre las relaciones personales, el homónimo se refiere a la igualdad que guarda el nombre de dos individuos, que por su similitud se cree que pertenecen a la misma persona, pero que en el fondo se trata de sujetos diferentes, cuyos nombres se escriben de la misma manera.

En este sentido se puede decir que la relación de igualdad de nombres no significa que se trate de la misma persona; ya que por la coincidencia habrá identidad de nombre, pero no igualdad de personas.

✓ Relación entre cosas

Con relación a cosas, estas serán nombradas de igual manera, pero no será la misma cosa, la cual se va a diferenciar por su especie.

En esta dase de homónimos lo que se va a diferenciar es la materia o cosa; es decir, que por su nombre se va a llamar o escribir de la misma manera, pero la materia se va a diferenciar de la otra u otras.

La diferencia entre los homónimos personales y cosas es que entre personas la materia es la misma; es decir, que son dos o más clases de materia igual y con nombre igual, pero cada una se diferencia de la otra únicamente por su identificación; en cambio, entre cosas el nombre es igual pero la materia es diferente.

La confusión estriba en que, en muchas oportunidades, se toma como igual la palabra o cosa, pero su distinción es diferente, ya que su significado no guarda ninguna similitud teniendo como base la igualdad somera, la cual no guarda comparación en fondo y forma; por ende, puede llevar a equivocación si la misma no se analiza detenidamente.

En tal virtud, la diferencia entre la cosa y la persona hace el fondo del homónimo, y para diferenciar una de la otra se debe analizar cada una para distinguirlas.

2.4.3 Acepciones de la homonimia

Algunos lingüistas establecen dentro de la homonimia la distinción entre homófonos, los términos cuya coincidencia es fonética pero no ortográfica, que dentro de la gramática se diferencian con claridad, aunque a simple vista pareciera que se estuviera tratando de un solo objeto.

Se cataloga como homónimos aquellas palabras que se pronuncian del mismo modo, aunque su ortografía difiera; o de las palabras de la misma ortografía, pero con sentido diferente.

Desde el punto de vista jurídico (que en el fondo es el que más nos interesa), existe homonimia cuando convergen dos personas con el mismo nombre, apellidos e incluso cualidades personales, como profesión u oficio.

Etimológicamente, el término homónimo proviene del latín *homonymus*, que a su vez procede del griego *homonymos*, que significa el mismo nombre.

La homonimia es el fenómeno consistente en que dos palabras completamente distintas han llegado a tener el mismo nombre, el mismo significante, la misma forma, pero, por ser palabras distintas, sus significados siguen siendo completamente distintos.

En el idioma español este fenómeno es menos frecuente que en otras lenguas, como el inglés o el francés, en las que la evolución de la lengua ha derivado en una extensa relación de palabras homónimas, que con frecuencia se aprovecha en publicidad y humor para crear juegos de palabras.

Las palabras homónimas pueden ser homógrafas u homófonas. De manera particular, en la lengua española, las palabras homófonas pueden ser homógrafas, mientras que las homógrafas son necesariamente homófonas, situación que no ocurre con otros idiomas.

A continuación, se describe con precisión cada una de estas variantes:

✓ **Palabras homónimas homófonas:** Son aquellas que coinciden fonológicamente, pero presentan significados diferentes; pueden ser homógrafas o no.

✓ **Palabras homónimas homógrafas:** Son aquellas que se escriben de igual manera, pero presentan significado diferente.

El origen de las palabras homónimas puede estar en dos evoluciones distintas. Se diferencia de la polisemia en que esta es una propiedad de las palabras consideradas de forma individual.

En la polisemia solo existe un étimo (una palabra origen), mientras que en la homonimia existen dos o más étimos; por ende, el significado de las dos palabras no está emparentadas. Por ello para identificar un homónimo debe estudiarse su etimología.

Muy seguramente cuando se habla de homónimo se denota una idea de confusión, sobre objetos que, por ser nombres, cuando de igual manera dan la apariencia de ser lo mismo; pero que al analizarse no guardan ninguna semejanza.

Así las cosas, los homónimos no guardan relación de igualdad en el fondo sino únicamente en su forma al nombrarlos. Por ende, la identidad en la forma se debe generalmente a la evolución fonética de las lenguas; que hace posible que términos sin ninguna relación etimológica, terminen coincidiendo en su significante, sin variar por ello su significado.

Para Villegas (2012), la homonimia estudia los homónimos tratando su diferenciación, aunque las palabras o cosas sean nombradas como igualdad, es decir, que, aunque sean iguales tienen una diferencia entre ellas. Los homónimos no guardan relación de igualdad en el fondo sino únicamente en su forma al nombrarlos. Es decir, gramaticalmente la homonimia es una relación semántica donde que se establece entre dos palabras cuando estas presentan identidad formal, fónica o gráfica, pero diferencia en el significado (Villagran, 2012, p.82).

Así mismo, para algunos autores la homonimia puede distinguirse desde dos puntos de vista, veamos:

✓ *En relación a los nombres personales:* el homónimo se refiere a la igualdad que guarda el nombre de dos individuos, que por su similitud se cree que pertenecen a la misma persona, pero que en el fondo se trata de sujetos diferentes, cuyos nombres se escriben de la misma manera.

✓ *En relación entre cosas:* estas serán nombradas de igual manera, pero no serán la misma cosa, la cual se va a diferenciar por su especie. En esta clase de homónimos lo que se va a diferenciar es la materia o cosa; es decir, que por su nombre se va a llamar o escribir de la misma manera, pero la materia se va a diferenciar de la otra u otras.

En este sentido, la diferencia entre estos dos tipos de homónimos es que entre personas la materia es la misma, es decir, que son dos o más clases de materia igual y con nombre igual pero cada una se diferencia de la otra únicamente por su identificación, en cambio entre cosas el nombre es igual pero la materia es diferente (Ixpata, 2009, citado por Sánchez, 2015, p.20).

Es por esto que la homonimia tiene a presentar problemas de confusión sobre todo en relación al nombre de las personas, más que a las cosas, ya que para el sistema social es más difícil distinguir un objeto común que asociar el verdadero nombre con una persona.

Lo homónimos no guardan relación en el fondo sino sólo en la forma en el que se nombra o se escriben, por los cual pueden causar una idea de confusión. Esto representa una problemática ya que esto se debe a que el empleo de la homonimia confunde a los involucrados por ejemplo a nivel jurídico, en el caso del derecho donde el uso del mismo nombre por una persona natural o jurídica puede causar diversas implicaciones o problemáticas legales para los individuos o representantes involucrados.

En el caso de las personas naturales estas se reconocen como personas físicas que son sujetos de derecho que tienen como característica principal las adquisiciones de derechos y

obligaciones sociales. Es decir, una persona natural es definida por haber alcanzado la calidad jurídica que exige el ordenamiento civil. En Colombia las personas naturales según el Código Civil en su artículo 74 se definen como “Son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición” (Código Civil Colombiano. Art. No. 74).

Esta definición actual de la persona natural se delimita y reconoce dentro de la aptitud de la persona de ser titular de derechos y deberse especialmente los del ámbito patrimonial, social y político, fortaleciendo su condición de ser humano que actuando en el marco de una relación jurídica se convertirá en sujeto de Derecho. De esta manera, jurídicamente la persona natural tiene como atributo esencial la personalidad, la cual “se concibe como la confluencia de una serie de derechos innatos, derivados de la misma naturaleza del hombre, entre los que se encuentra el ser posible titular de derechos y obligaciones civiles” (Galiano, 2013, p. 4).

Por tanto, la personalidad jurídica es general e inalterable, lo cual significa que, si se es persona se tiene personalidad, y esta a su vez tiene diversos atributos reconocidos por el estado a través del ordenamiento jurídico. Tal y como explica Garfias (1991), para este autor la personalidad significa que el sujeto puede actuar en el campo del derecho, es la proyección del ser humano en el ámbito de lo jurídico (p. 306). Entonces, esta es principalmente la aptitud que se tiene para ser portador de derechos o deberes jurídicos, familiares y patrimoniales, además de que se reconozca como un ser único e irrepetible en la sociedad gozando de nacionalidad, estado civil, el domicilio, patrimonio, pero sobre todo el nombre.

De este modo, según Medina (2017) los casos de homonimia en las personas naturales ocasionan simplemente errores que pueden ser fácilmente detectados y corregidos, o alguna otra

molestia menos que no justifica la intervención de la autoridad para ponerle remedios (p. 628). Estos dependen a su vez de cuán común sea el nombre que tenga la persona y otros factores con los que se pueden caer en factores estadísticos de las probabilidades de la ley.

Este tipo de problemáticas pueden traer graves daños y perjuicios para las personas afectadas bajo esta figura ya que por ejemplo en casos donde la confusión de un nombre involucra una orden de captura, muchas personas perjudicadas han sido privadas de su libertad sin ser culpables por delitos, únicamente por la semejanza de los nombres con los verdaderos delincuentes. Esto ocasiona que la figura del homónimo se convierta en una causa de preocupación para los ciudadanos.

Según Villagrán (2012), en un país latinoamericano como Guatemala:

La mayoría de casos de homónimos deriva de factores culturales más que jurídicos, dado que, en ciertas regiones del país, acostumbran a registrar con el mismo nombre y apellido, a los miembros de una familia, con el fin de resguardar tradiciones que pasan de generación en generación (Villagrán 2012. p. 88).

Sin embargo, este mismo autor explica que en muchos casos los homónimos surgen a raíz de la falsificación de documentos y la usurpación de identidad. Por otra parte, Sánchez (2015) explica que este problema se refleja comúnmente en ciudadanos que al salir del país se encuentran con prohibiciones que no le corresponde (p. 21), o también en personas que, en el momento de crear un crédito, una cuenta bancaria o cualquier aspecto legal, se encuentran con problemas de homonimia en sus nombres. Es por esto que en muchas ocasiones las autoridades deben, antes de hacer prendimientos más complejos, percatarse de aspectos personales, étnico, y culturales de las personas con el fin de establecer completamente la identidad de la persona.

De este modo, cuando una persona se ve implicada en este tipo de situación pueden traer daños irreparables como perder la libertad, además su patrimonio y bien nombre. Según Moro (1999) el daño patrimonial, siempre se puede tasar en dinero, pero el no patrimonial se refiere a daños morales o a los derechos de las personas. En este último caso, es difícil de cuantificarlo (s.p.). Es decir, cuando una persona es dañada desde su buen nombre se atiene a múltiples consecuencias como el impedimento de procedimientos, juicios legales, e incluso la cárcel, de este modo es necesario que en el caso de las personas naturales la homonimia tenga fuertes bases judiciales.

Y la homonimia no sólo afecta a personas naturales sino también a personas jurídicas, las cuales representan colectividades y poseen derechos y obligaciones. Según el Código Civil colombiano en su artículo 633 se definen personas jurídicas como “una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Las personas jurídicas son de dos especies: corporaciones y fundaciones de beneficencia pública.” (OEA, s.f., p. 202). A través del uso de la colectividad dirigida las personas jurídicas como sujetos de derecho, es decir con capacidad para derechos y obligaciones, pueden lograr un fin común y reconocimiento ante el estado.

La persona jurídica tiene al igual que las personas físicas un nombre, un domicilio, una nacionalidad y un patrimonio autónomo o social. Además, pueden clasificarse en públicas y privadas. Las personas jurídicas públicas son creadas por parte de la autoridad pública, los recursos para su creación provienen de fondos públicos, es decir estas son “las que emanan directamente del Estado y gozan de derecho de potestad pública y establecen relaciones de subordinación, teniendo como fin la prestación de los servicios públicos y la realización de ciertas actividades de carácter comercial” (Aguilar, 2007, p. 265). Dentro de las personas

públicas están el estado, los departamentos y municipios, los establecimientos públicos y las empresas comerciales e industriales del Estado.

Las personas jurídicas privadas nacen de la iniciativa privada, son creadas por los particulares con fondos privados, según Valencia (1981) son aquellas que se establecen mediante la iniciativa de los particulares (negocio jurídico), su funcionamiento se realiza mediante un patrimonio particular y son administrados por órganos que no forman parte de la organización pública (p. 13). Las personas jurídicas privadas se clasifican en las asociaciones con ánimo de lucro como sociedades, colectivas, en comandita, de responsabilidad limitada, anónimas, de economía mixta, extranjeras o sociedades por acciones simplificadas; y las asociaciones sin ánimo de lucro como corporaciones, fundaciones, sindicatos y cooperativas.

En el caso de este tipo de personas, la homonimia está más definida según las relaciones comerciales de las empresas, es decir a través de la razón o denominación social de los entes económicos. En este sentido, se puede entender que:

La denominación social es la forma de identificar a una sociedad de otras, asegurando la transparencia de las relaciones comerciales y el correcto funcionamiento de las sociedades. Así mismo, el nombre comercial lo podemos definir como la designación que adopta la persona jurídica para desarrollar actividades comerciales, constituye una propiedad industrial, admitiéndose su enajenación en forma separada al establecimiento comercial (López, s.f., s.p.).

La homonimia en este caso implica la existencia de dos comerciantes (personas naturales, sociedades comerciales o establecimientos de comercio) con nombres idénticos, sin tener en cuenta la naturaleza jurídica (S.A., Ltda.) o nombres reservados para las instituciones financieras

o comunes sin reserva para el uso del público en general. No hay homonimia cuando dos nombres son similares (Cámara de Comercio de Bogotá, s.f., s.p.).

En este sentido, en Colombia la ley, en el Artículo 35 del Decreto 410 de 1971, exige a las Cámaras de Comercio abstenerse de inscribir un comerciante o un establecimiento de comercio cuando se compruebe que en la base de datos de todas las cámaras de comercio del país (RUE –Registro Único Empresarial–) se encuentre otro ya inscrito con el mismo nombre del solicitante (Cámara de Comercio de Medellín, 2010, p. 35). Así mismo, se expone que “en los casos de homonimia de personas naturales podrá hacerse la inscripción siempre que con el nombre utilice algún distintivo para evitar la confusión” (Presidencia de la República, 1971, s.p.). De este modo, la selección del nombre de personas jurídicas y naturales debe ser cuidadosa y bien diligenciada con el fin de no cometer errores que impliquen casos de confusión.

De todas formas, se presenta a continuación, una guía otorgada por la Cámara de Comercio de Bucaramanga, que rige a nivel nacional, para evitar la incidencia de la homonimia en personas jurídicas.

El Control Nacional de Homonimia permite que el registro de nombres de sociedades y establecimientos de comercio sea controlado no solo en la jurisdicción en la cual se realiza la inscripción del mismo sino también a nivel nacional. Esta consulta permite conocer si existen o no otras empresas o establecimientos con el mismo nombre de la empresa que el empresario desea registrar. Antes de consultar un nombre tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- De acuerdo con la Ley, la Cámara de Comercio no registra nombres iguales a otros que ya se encuentren inscritos. En consecuencia, no se matricula a una persona natural o jurídica, ni a un establecimiento de comercio, sucursal o agencia que tenga el mismo nombre de otro ya inscrito.

- Es responsabilidad del usuario realizar la Consulta de Marca para evitar conflictos con los Nombres registrados ante la Superintendencia de Industria y Comercio
- La inscripción por parte de la Cámara de Comercio de un nombre no significa que él no genere confusión o error en el mercado.
- Tenga en cuenta que la inscripción en el registro mercantil de un nombre similar a otro ya inscrito no impide la posible aplicación de sanciones por la autoridad competente.
- Para evitar posibles sanciones legales, evite matricular nombres que puedan generar confusión con otros ya registrados.
- Es conveniente que el nombre que se pretende utilizar sea tan distinto como sea posible de los que ya se encuentren registrados.
- Ninguna Cámara de Comercio del país se encuentra autorizada para reservarle un determinado nombre. Si entre el tiempo de la consulta del nombre y el momento en el que se presente para inscripción el nombre respectivo ya se ha inscrito otro igual, no podrá accederse al registro. La consulta no le garantiza ninguna prioridad al nombre ni ningún derecho a usarlo. Para evitar este inconveniente realice su matrícula lo antes posible.
- No son diferenciadores las expresiones que identifican el tipo de sociedad o que por ley deben añadirse al nombre (Ltda, S.A, S en C). Por ej: Carnes y Carnes S en C se considera idéntico al nombre Carnes y Carnes Ltda.
- Tenga en cuenta que en caso de duda conviene que se acerque a la sede de la cámara de comercio más cercana para preguntar expresamente por la posibilidad de inscribir un determinado nombre.

2.5 El Procedimiento de declaración de homonimia

Basados en el trabajo del peruano Jorge A. Pérez López (Abogado, con estudios culminados de Maestría en Ciencias Penales en la USMP), se plasma dicho procedimiento, en aras de orientar a los colegas interesados en el tema.

Cuando diferentes personas tienen nombres iguales o parecidos, los actos realizados por uno de ellos pueden afectar directa o indirectamente en la vida cotidiana de los otros, sin que estos últimos hayan intervenido en la producción de dichos sucesos y sus correspondientes resultados.

Las consecuencias de las acciones realizadas por una persona, recaídas en forma directa o indirecta, en la vida de otras, ocasionan beneficios y/o perjuicios, los cuales quedan supeditados a que dichas actividades se desarrollen en observancia de la ley o al margen de ella.

Cuando el parecido o similitud del nombre se presenta con una persona que realiza actividades al margen de la ley, se produce un cuestionamiento denominado homonimia, circunstancia que motiva la realización del presente trabajo.

a. Concepto de homonimia

El 27 de Julio de 1970, se publicó en el Diario Oficial “La Gaceta” el **Decreto 1260** (Por el cual se expide el Estatuto del Registro del Estado Civil de las personas); **Ley 8a. de 1969**, que regula el procedimiento en los casos de homonimia, la misma que en su tercer Artículo señala que estamos ante la presencia de esta figura jurídica de homonimia, cuando una persona, detenida o no, tiene los mismos o similares nombres o apellidos de quien se encuentra requisitoriado por la autoridad competente.

La requisitoria vendría a ser la orden de detención o captura a nivel nacional, encargada a la Policía Nacional (La Policía juega un papel muy importante, ya que la investigación policial constituye un punto inicial, a partir del cual deberá procurarse la plena identificación de las personas que pudieran estar comprometidas en un hecho delictuoso. Para la detención de una persona requerida, la policía Nacional debe identificarla fehacientemente, asimismo, tomará la información dactiloscópica del requisitoriado), por la autoridad jurisdiccional, siendo dirigida contra quien se retrae al llamado de la justicia, pese a los requerimientos y apercibimientos decretados en el transcurso de un proceso judicial.

b. Formalidades de La Orden de Detención o Requisitoria

El juez, ante el incumplimiento de la persona para comparecer a su llamado, cursa oficio a la Policía Nacional, requiriéndole ubique, capture y ponga a disposición de su juzgado a la persona que señala el documento indicado.

Cursado el oficio a la Policía Nacional, ésta para proceder a la detención de la persona requisitoria, debe manejar información que conlleve a su identificación fehacientemente; en caso de duda, deberá solicitar la intervención del Ministerio Público; ambos descartarán que la persona con órdenes de ubicación y captura expedidas por un órgano jurisdiccional sea un homónimo, es decir, otra persona con los mismos nombres y apellidos, pues se debe tener presente que ante todo está en juego la libertad de una persona totalmente ajena a los hechos materia del proceso judicial.

Los datos que deben contener las órdenes de detención dictadas por el órgano jurisdiccional, denominadas también, como se ha dicho con anterioridad, requisitorias judiciales, a efecto de individualizar al presunto autor de un hecho delictuoso, son según el artículo 3° del **Decreto 1260 del 27 de Julio de 1970** Garantías por motivos razonablemente

fundados, según el Art. 221 del CPP, los siguientes: Nombres y apellidos completos del requisitoriado, edad, sexo, fecha y lugar de nacimiento, documento de identidad, domicilio, fotografía (de ser posible), características físicas, talla, contextura, cicatrices, tatuajes y otras señas particulares, nombre de los padre, grado de instrucción, profesión u ocupación, estado civil, nacionalidad.

Los datos que son obligatorios, bajo responsabilidad, según la última ley mencionada son: los nombres y apellidos completos del requisitoriado, su edad, su sexo y sus características físicas. En caso de desconocerse algunos datos de identidad personal, deben señalarse en el mismo mandato de detención.

Al recibir una requisitoria, que no contenga los datos obligatorios señalados en el párrafo anterior, la Policía Nacional deberá solicitar inmediatamente una aclaración al órgano jurisdiccional que emitió la orden de ubicación y captura.

El registro nacional de requisitorias, es el ente encargado de llevar un registro unificado de todas las órdenes referidas a la libertad individual de las personas.

c. Competencia

La competencia de los jueces penales está supeditada al lugar donde se efectuó la captura de quien manifiesta ser homónimo de la persona requisitoria; o, del lugar donde la persona enterada de la existencia de un requisitoriado o procesado que lleva sus nombres iguales o parecidos, recurre ante el juez para solicitar se declare la homonimia.

Será competente el juez penal que ordenó la captura o mandato de detención siempre que la detención se haya efectivizado en el lugar de su jurisdicción, independientemente de que

la causa se encuentre en otra instancia. Realizada la captura en lugar distinto a su jurisdicción, el competente será el Juez Penal de turno del lugar de la detención.

Por otro lado, cuando el proceso de declaración de homonimia se inicie por una persona enterada de la existencia de un requisitoriado o procesado que tiene iguales o parecidos nombres a ella, el magistrado competente será el Juez Penal de Turno en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del solicitante.

Si la detención se verifica en lugar distinto a la jurisdicción del juez que emitió el mandato de detención, será competente el juez penal de turno del lugar en que se produjo la detención, quien deberá solicitar a la autoridad correspondiente que se le proporcione copia del oficio que dispone la ejecución de detención del requisitoriado; dicho documento deberá consignar debidamente todos los datos señalados líneas arriba, sobre todo los obligatorios, pudiendo solicitar las piezas pertinentes al órgano jurisdiccional que viene conociendo el proceso penal cuando no es suficiente el mandato de detención expedido por el juez de origen.

d. Trámite del Procedimiento de Homonimia

El trámite del procedimiento de homonimia se inicia cuando el detenido manifiesta ser persona distinta a la que se contrae en el oficio de ubicación y captura expedido por un órgano jurisdiccional; o quien estando en libertad se entera de la existencia de una requisitoria contra una persona que tiene sus mismos nombres y apellidos.

En el caso de aquellas personas que estando en libertad, tomen conocimiento de la existencia de una posible homonimia, podrán recurrir al Juez Penal de su domicilio, solicitando la declaración de ésta situación, para lo cual deberá acompañar copia de sus documentos de identidad personal y los demás que estime conveniente; el solicitante deberá dejar su impresión

dactiloscópica a fin de realizarse el cotejo respectivo. El juez practicará entonces las diligencias necesarias, debiendo resolver en el plazo de 5 días hábiles. Esta resolución es apelable dentro del tercer día de notificada. El órgano jurisdiccional superior, resolverá en un plazo máximo de 5 días hábiles.

En el caso de un detenido que refiere ser homónimo de quien aparece requisitoriado, será puesto a disposición del juez penal respectivo dentro de las 24 horas de su detención o en el término de la distancia. En este plazo el juez dispondrá las diligencias que considere necesarias para el esclarecimiento del pedido. Este plazo no se aplicará en los casos de terrorismo, terrorismo especial, traición a la patria, espionaje y tráfico ilícito de drogas, salvo que el Juez Penal respectivo asuma jurisdicción antes de que venza el plazo de detención preventiva fijado para éste tipo de delitos, es decir, 15 días.

El detenido que alegue homonimia deberá presentar al juzgado las pruebas necesarias para acreditar su verdadera identidad, las mismas que se confrontarán con los datos relativos a la persona requisitoria. Se podrá presentar como prueba el cotejo de las impresiones dactiloscópicas del detenido y del requisitoriado. El juez resolverá la solicitud de homonimia del detenido en el plazo máximo de 24 horas, bajo responsabilidad, disponiendo las diligencias que considere necesarias para el esclarecimiento del pedido.

El juez que tenga a su cargo el proceso de homonimia deberá solicitar la información necesaria al Registro Nacional del Estado Civil (Registraduría), para resolver la solicitud de homonimia, la cual deberá ser proporcionada en el día. Sobre éste punto cabe señalar que la Registraduría cuenta con convenios con el Poder Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional, por lo que estas instituciones podrían solicitar información de las personas

requisitoriadas y de sus homónimos a través de internet, facilitando la identificación de las personas que rehúyen al llamado de la ley.

El Juez determinará si el detenido es o no la persona a la que se contrae la requisitoria; si no lo es, se dispondrá la inmediata libertad del detenido, cuando la libertad es ordenada por el juez distinto al que emitió el mandato de detención, remitirá el incidente para que se acumule al principal; en cambio, si se resuelve que el detenido es la persona requerida por la justicia, se dispondrá la prosecución del proceso o se ordenará que inmediatamente sea puesto a disposición de la autoridad judicial solicitante.

Los procesos en los cuales se declare fundada la solicitud de homonimia no traen como consecuencia la suspensión del proceso penal, ni afectan la orden de detención dictada por el Juez de origen.

Si luego de cumplido el plazo señalado anteriormente, no se ha llegado a determinar la homonimia, el juez deberá disponer la inmediata libertad del detenido, salvo en los casos de terrorismo, terrorismo especial, traición a la patria, espionaje y tráfico ilícito de drogas. Todo esto se aplicará sin perjuicio de que el Juez competente practique las diligencias ampliatorias que considere necesarias y resuelva en el plazo de cinco días naturales, computados desde la fecha en que se decretó la libertad. El Juez puede adoptar las acciones necesarias a fin de garantizar que la persona no eluda el proceso, pudiendo dictar diferentes reglas de conducta.

La resolución que dicta el Juez sobre pedido de homonimia de detenidos, es apelable en el plazo máximo de 3 días de notificada, debiendo fundamentarse en el mismo escrito de apelación o a los 5 días de presentado el mismo, la cual será resuelta por el órgano jurisdiccional superior en un plazo que no excederá las 24 horas. La resolución que ordene la libertad del detenido se ejecutará aun cuando se interponga apelación contra ésta.

Las certificaciones de homonimia, deberán ser inscritas de oficio en el Registro Nacional de Requisitorias del Poder Judicial.

2.6 Marco legal

Vale la aclaración, que una vez establecido el marco legal de la homonimia, se está dando respuesta al primero de los objetivos específicos planteados para el desarrollo de este trabajo.

En Colombia la homonimia ha sido regulada tanto para personas jurídicas como naturales. Es decir, se ha venido ampliando el panorama normativo que regula tanto los procesos jurídicos en los que se ve envueltos las personas, así como los aspectos que se deben tener en cuenta a la hora del registro de entes económicos que puedan incurrir en casos de homonimia.

✓ Constitución Política de Colombia en la cual en su Artículo 15 se expone que:

Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas (Corte Constitucional, 1991, s.p.).

✓ **Ley 8a. de 1969** y consultada la comisión asesora que estableció la misma, por la cual se concede al Presidente de la República facultades extraordinarias para reformar el sistema de notariado, registro de instrumentos, catastro, registro del estado civil de las personas y de constitución, transmisión y registro de derechos reales y trabas sobre vehículos automotores, reglamentos de policía vial y de circulación para cumplir lo estatuido hoy en el artículo 92 de codificación constitucional vigente. El Congreso de Colombia DECRETA: Artículo 1. Revístase al Presidente de la República de facultades extraordinarias por el término de un año, que se contará a partir de la vigencia de la presente Ley, para que revise los sistemas de notariado,

registro de instrumentos públicos y privados, catastro y registro del estado civil de las personas, y expida: (Nota: Inciso 1º declarado exequible por la Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 21 de junio de 1971. Sala Plena. M. P. Eustorgio Sarria, en cuanto otorga facultades para revisar el sistema de notariado.). a) El Estatuto del Notariado, con las normas atinentes a la función notarial; a la reglamentación del ejercicio de la misma; a la validez y subsanación de los actos notariales; a los libros y archivos que deben llevar los Notarios; a la organización del notariado, para lo cual podrá crear, suprimir, refundir y redistribuir círculos notariales, establecer categorías, disponer los requisitos y los medios de provisión, permanencia y relevo de los Notarios, y proveer a la reglamentación del Colegio de Notarios; a la vigilancia notarial, al arancel y al sostenimiento del servicio.

✓ **Decreto 1260 del 27 de Julio de 1970** (Por el cual se expide el Estatuto del Registro del Estado Civil de las personas), decretó en su Título I (Del estado civil de las personas), definiendo el estado civil de las personas: Artículo 1. _ El estado civil de una persona es su situación jurídica en la familia y la sociedad, determinada su capacidad para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones, es indivisible, indisponible e imprescriptible, y su asignación corresponde a la ley.

Así mismo, en su Título II (Del derecho al nombre y su tutela), A la letra reza el Artículo 3.

Toda persona tiene derecho a su individual y, por consiguiente, al nombre que por ley le corresponde. El nombre comprende, el nombre, los apellidos, y en su caso, el seudónimo. Dejando claro, además, que: No se admitirán cambios, agregaciones o rectificaciones del nombre, sino en las circunstancias y con las formalidades señaladas en la ley. Para ello, el juez, en caso de homonimia, podrá tomar las medidas que estime pertinentes para evitar confusiones (Presidencia de la República, 1970, p.2).

. Igualmente, dicho Decreto establece el derecho que le asiste a afectado para demandar la restitución al buen nombre en el Artículo 4.

La persona a quien se discuta el derecho al uso de su propio nombre, o que pueda sufrir quebranto por el uso que otra haga de él, puede demandar judicialmente que cese la perturbación y se le dé seguridad contra un temor fundado, así como la indemnización de los daños a los bienes de su personalidad y del daño moral que haya sufrido. A falta de aquella persona, la acción podrá proponerse por quien demuestre un legítimo interés, fundado en razones familiares dignas de protección. (Presidencia de la República, 1970, p.2).

✓ **Sentencia T-014/11 Acción de tutela contra juzgado penal municipal**-caso en que el demandante fue víctima de suplantación de identidad.

Acción de tutela contra providencias judiciales-reiteración de jurisprudencia.

Acción de tutela contra providencias judiciales-caracterización del defecto fáctico como causal de procedibilidad.

Mediante apoderado judicial, el veinticuatro (24) de mayo de dos mil diez (2010), el ciudadano Ericsson Ernesto Bohórquez Rojas instauró acción de tutela contra el Juzgado Primero Penal Municipal de Bello, Antioquia, por considerar que dicha autoridad judicial vulneró sus derechos fundamentales al buen nombre, al *habeas data*, a la honra y al trabajo. donde se procede a una acción de tutela frente a la suplantación de identidad ya que en este caso de estudio se propagó información errónea sobre el accionante, la cual distorsionó su imagen pública, proyectándolo a la sociedad como un delincuente. De este modo:

Por lo tanto, resulta necesario cesar dicha vulneración y reestablecer los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra, evitando que se continúe asociando la identidad

personal del accionante (nombre y cédula) con la comisión del delito de hurto calificado y agravado en calidad de tentativa (Corte Constitucional, 2011, s.p.).

✓ **Sentencia T-578/10**, Acción de tutela instaurada por Jorge Enrique Briceño Suárez contra el Juzgado 2° Penal del Circuito Especializado de Pasto, y otros, el Departamento Administrativo de Seguridad –DAS-, la Policía Nacional, las Fuerzas Militares de Colombia, la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura, donde se da una acción de tutela ya que en este caso el demandante fue víctima de suplantación de identidad por parte de alias “Mono Jojoy.” Por lo que fue investigado, acusado o sentenciado en contumacia, en un cúmulo de procesos penales. En este sentido, con la figura del homónimo son vulnerados los derechos al buen nombre, a la dignidad humana, y a la igualdad del implicado. Según la Corte Suprema: El demandante es sin lugar a dudas, una persona distinta al individuo conocido públicamente como “Mono Jojoy”, respecto de quien existen múltiples investigaciones penales, requerimientos, órdenes de captura, sentencias condenatorias en ausencia, y aún una circular roja de la INTERPOL, originadas en hechos que se le atribuyen en su condición de jefe militar de las FARC. Está establecido así mismo, a partir de certificación emanada de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que en el Archivo Nacional de Identificación (ANI) solo figura una persona con el nombre y como titular de la cédula de ciudadanía, identidad que corresponde al aquí demandante. Resulta claro entonces, que este fue víctima de una suplantación de identidad, por parte de quien aparece investigado, acusado o sentenciado en contumacia, en un cúmulo de procesos penales. (Sentencia T-578/10)

✓ **Sentencia T-744/02. Derecho al buen nombre-alcance**
Derecho a la honra-alcance

Derecho al buen nombre-suplantación de persona e identidad

derecho a la honra-suplantación de persona e identidad.

Homónimo antecedentes penales-suplantación de persona e identidad

Derecho a la identidad-Suplantación de persona

Habeas Data-Rectificación en banco de datos oficiales. Referencia: expediente T-598919.

Acción de tutela instaurada por Cesar Eduardo Alfonso Prieto contra el Juzgado Dieciocho Penal del Circuito de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación. En la cual por medio de una acción de tutela se reconoce la vulneración al derecho al buen nombre y la honra mediante la suplantación del actor a través de la homonimia (Corte Constitucional, 2002, s.p.). Así como estas existen múltiples sentencias que se han encargado de hacer visible la figura del homónimo y las afectaciones que trae consigo cuando una persona incurre en estos, ya sea de forma voluntaria o involuntaria.

✓ **Sentencia T – 437 de 2004.** M.P. Clara Inés Vargas Hernández. Pág. 26. Derecho al Buen Nombre. Este derecho también se encuentra consagrado en el art. 15 de la Constitución Política de Colombia protege igualmente el derecho al buen nombre, como aquel derecho que se adquiere como consecuencia de las buenas acciones personales, comerciales y/o sociales que se ejecutan.

✓ **Sentencia T-653/14** la cual se refiere a dos casos de homonimia o suplantación de identidad en proceso penal. El primero de ellos se basa en el hecho de que el señor Reinaldo de Jesús Becerra de Bogotá fue condenado en un proceso penal sin que mediara una debida individualización e identificación por lo que la autoridad competente concedió la libertad y concluyó que existe un caso de homonimia.

En este caso se hizo una violación de los derechos al buen nombre y habeas data, puesto que, si bien existe certeza del caso de homonimia, ninguna de las autoridades judiciales profirió decisiones eficaces que permitan recuperar el buen nombre del actor. Así mismo, el segundo caso del señor Julio Cesar Jiménez considera vulnerados los derechos fundamentales a la honra, habeas data, locomoción, buen nombre, debido proceso, defensa, libertad personal, igualdad, y derechos civiles y políticos. Esto debido a que:

Al momento de consultar sus antecedentes disciplinarios se informa que mediante sentencia 0052 de 2009, fue condenado por el delito de secuestro extorsivo, fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las fuerzas armadas, a una pena privativa de la libertad de 31 años (Corte Constitucional, 2014, s.p.).

Con lo cual se concluyó que se estaba ante un caso de homonimia donde las personas habían sido confundidas por el nombre, sin embargo, las características físicas según los testimonios son muy diferentes. Por tanto, se determinó que existe una afectación de los derechos fundamentales al buen nombre, honra y habeas data.

✓ **Sentencia C-489/2002**, El ciudadano Guillermo Pardo Piñeros, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política, demandó la inexequibilidad de los artículos 82 numeral 8° y 225 de la Ley 599 de 2000. La Corte mediante auto de diciembre siete de 2001, proferido por el Despacho del magistrado Sustanciador, admitió la demanda y ordenó comunicarla al Presidente del Congreso, al Fiscal General de la Nación, al Ministro de Justicia y del Derecho, a la Sociedad Interamericana de Prensa y al Círculo de Periodistas de Bogotá.

Una vez cumplidos los trámites previstos en el artículo 242 de la Constitución y en el Decreto 2067 de 1991, y rendido el concepto del señor Procurador General de la Nación, procede la Corte a resolver sobre la demanda de la referencia.

El derecho al Buen Nombre es entendido como la “reputación o el concepto que de una persona tienen los demás y que se configura como derecho frente al detrimento que pueda sufrir como producto de expresiones ofensivas o injuriosas o informaciones falsas o tendenciosas...” de la misma manera la sentencia T 977 de 1999 indica que “el derecho al buen nombre, se lesiona por las informaciones falsas o erróneas que se difundan sin fundamento y que distorsionan el concepto público que se tiene del individuo”

Este derecho igualmente viene siendo amparado en el art. 12 de la declaración Universal de los Derechos Humanos, al indicarse dentro del mismo

“Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio y su correspondencia...”. Tenemos entonces que en base a lo que estipula el art. 14, numeral 1º de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos respecto a que “toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la Ley”

✓ **Sentencia T-578/10** (Corte Constitucional, 2010) en la que se manifiesta que el Jorge Enrique Briceño Suarez fue arrestado por la Fiscalía General de la Nación en 2005, en cumplimiento de una orden de captura proferida por la Unidad Nacional de Derechos Humanos ya que se identificaba con el alias de Mono Jojoy, reconocido integrante de las FARC.

Sin embargo, tras el reconocimiento de que hay un caso de homonimia la Fiscalía General de la Nación no había desarrollado las actuaciones judiciales tendientes a restablecer el buen nombre y la dignidad del actor, ocasionándole así graves perjuicios materiales y morales. Por lo que se ordena a la misma y a la Registradora remover estos cargos y así seguir evitando el incumplimiento de sus deberes.

✓ **Sentencia T-228 de 1994** se indicó que “el buen nombre alude al concepto que del individuo tienen los demás miembros de la sociedad en relación con su comportamiento, honestidad, decoro, calidades, condiciones humanas y profesionales, antecedentes y ejecutorias”. El buen nombre se vulnera cuando se publican informaciones erróneas o falsas, ocasionando de esta manera un desprestigio de la persona en sociedad.

Por consiguiente, en COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. (Sentencia T -437 de 2004), expresa que son actuaciones contrarias al buen nombre de las personas:

las informaciones que ajenas a la verdad y emitidas sin justificación alguna, de manera directa o personal o a través de los medios de comunicación, distorsionen el prestigio social que un individuo ha adquirido y socaven, en consecuencia, la confianza y la imagen que tiene la persona en su entorno social.

✓ **Sentencia T-558/07**, en esta se expone el caso de la Señora Aura Cely Rojas Rojas que presentó ante el CAP de Tulúa del ISS, la documentación requerida para obtener el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a la que considera tener derecho.

Pero la señora expone que aún no se le había entregado la pensión ya que:

Según la entidad accionada informó que no ha sido posible darle una solución a su caso, por cuanto en el sistema de nómina de la entidad ya aparece como pensionada y recibiendo la pensión de

sobrevivientes una señora que figura con el mismo nombre y el mismo número de cédula de ciudadanía de ella (Corte Constitucional, 2007, s.p.).

El juez finalmente, se resuelve que existe un caso de homonimia pues según el sistema de nómina de la entidad expone que en este “figura la señora Aura Rojas Rojas, identificada con la misma cédula de ciudadanía de la accionante, como “...*como causante de la pensión...*”, cuya prestación es recibida por una hija suya, cuyo número de cédula es diferente a la de la accionante” (s.p.). Por lo tanto, se decide que la entidad debe organizar el error en un término de 48 horas sin que haya excusa y así subsanar los daños causados.

✓ **Sentencia T-036/16** en la que se expone el caso del señor Juan Alberto Jiménez Díaz quien interpuso acción de tutela contra la Dirección Seccional de Fiscalías de Cartagena ya que el señor quien en el año 2012 trabajaba para una institución educativa que le pidió que allegara los certificados de antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales, con el fin de actualizar la base de datos y las hojas de vida del personal de la entidad para el año 2013.

Agrega que al ingresar a la página web de la Procuraduría General de la Nación y consultar la cédula de ciudadanía del accionante, se generó el certificado de antecedentes disciplinarios en el que figuraba una anotación de (i) pena de prisión por el término de 12 años por los delitos de fabricación, porte, y tráfico de arma de fuego y municiones, hurto calificado agravado y tentativa de homicidio y (ii) una inhabilidad para ejercer cargos públicos (Corte Constitucional, 2016, s.p.).

El señor envió varias cartas a la Procuraduría General de la Nación sin embargo nunca recibió respuesta, para del año 2014, el accionante consultó sus antecedentes en la base de datos de la Policía Nacional y no aparecía un requerimiento pendiente ante la justicia, por lo que infirió

que su derecho al buen nombre había sido restablecido. Sin embargo, según el apoderado, en el mes de febrero del año 2015 el actor (quien es parte de la asociación de padres de familia del colegio en el que trabaja) fue postulado para integrar una nueva Junta Directiva del ICBF. No obstante, al presentar la documentación requerida para aspirar al cargo, le fue negado su derecho a ejercerlo porque en el certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación figuraba una inhabilidad de 20 años para desempeñar cargos públicos.

✓ **Sentencia T-949/03** en la cual se presenta el caso del Mauricio Vargas Espinosa quien en el año 2003 se acercó a las instalaciones del DAS con el fin de refrendar su pasado judicial, donde se enteró de que su nombre aparecía vinculado a la prosecución de un proceso penal en la ciudad de Medellín y que había sido condenado a pena privativa de la libertad por los delitos de hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas de fuego. Sin embargo, el señor siempre manifestó que nunca había ido a la ciudad de Medellín ya que el siempre había estado en Bogotá, además de esto en su registro y cedula aparece con una señal de amputación en su dedo anular derecho, mientras que la persona acusada no, es decir había un evidente caso de homonimia.

Por lo tanto, la corte decide que:

El DAS corrija la información que conste en las bases de datos de dicho Departamento, en el sentido de que sea suprimida cualquier información que asocie el nombre (M.V.E.) y el número de cédula de ciudadanía (79'603.621 de Bogotá), a la condena por los delitos de hurto agravado y calificado y porte ilegal de armas de fuego proferida por el Juzgado Dieciséis Penal del Circuito de Medellín (Corte Constitucional, 2003, s.p.).

Todo esto con el fin de reparar el buen nombre y el habeas data del actor como derechos fundamentales de los ciudadanos.

✓ **Sentencia T1ª 00049/17** (Tribunal Superior De Pereira, 2017) en la que se expone el caso del señor Santiago Alberto Benavides Plazas quien consideraba que sus derechos al habeas data, mínimo vital, dignidad humana, debido proceso e igualdad habían sido perjudicados ya que en el 2016 estando en la ciudad de Pereira, fue capturado tras una orden emitida por un juzgado de la ciudad de Barranquilla. Sin embargo, el señor alega que la captura obedeció a la suplantación de su identidad y a un error en la identificación, lo que demuestra un caso de homonimia.

Además, demanda el hecho de que la Procuraduría General de la Nación, aún conserva en su base de datos la identificación como responsable del delito de hurto calificado y agravado, por lo que ha perdido oportunidades laborales, lo que termina afectando a su familia ya que no encuentra trabajo además de que aún lo tratan como un delincuente. Por lo cual pide que se restablezcan sus derechos y buen nombre, sin embargo, finalmente la acción de tutela no procedió debido a incongruencias en el proceso ya que el demandado no utilizó las vías judiciales ordinarias de defensa, sino que directamente llevo a lugar a la acción constitucional, lo que no lo dejó respetar el proceso.

Esta base legal expuesta demuestra que la homonimia es una problemática creciente que mediante los mecanismos que ofrece el estado busca ser reducida tanto para las personas jurídicas como naturales, quienes se ven afectados por múltiples daños y perjuicios a su nombre, identidad y patrimonio, además de vulnerarse derechos fundamentales como el buen nombre, la honra y la libertad. En este sentido, es necesario que se desarrollen aún más mecanismos que minimicen y prevengan de forma efectiva este tipo de errores sobre todo en el caso de las personas, pues en la actualidad las Cámaras de Comercio cumplen un buen papel en las personas jurídicas.

En el caso de las personas jurídicas, uno de los primeros decretos que avalan la protección del nombre o la denominación social.

✓ **Decreto 410 de 1971 o Código de Comercio** que, en su artículo 35, expone que:

Las cámaras de comercio se abstendrán de matricular a un comerciante o establecimiento de comercio con el mismo nombre de otro ya inscrito, mientras éste no sea cancelado por orden de autoridad competente o a solicitud de quién haya obtenido la matrícula. En los casos de homonimia de personas naturales podrá hacerse la inscripción siempre que con el nombre utilice algún distintivo para evitar la confusión (Presidencia de la República, 1971, s.p.).

✓ **Artículo 607** Código de Comercio, se hace la prohibición a terceros el empleo de un nombre comercial o de una marca de productos o de servicios, que sea igual o similar a un nombre comercial ya usado para el mismo ramo de negocios, salvo cuando se trata de un nombre que por ley le corresponda a una persona. Por tanto, el artículo 35 fue reglamentado por el Decreto 1074 de 2015 que en su artículo 2.2.2.38.6.6., expone frente al control de la homonimia que en aplicación del control de homonimia establecido en el artículo 35 del Código de Comercio, se entenderá que se trata de nombres idénticos, sin tener en cuenta la actividad que desarrolla el matriculado (Presidencia de la República, 2015, p. 277).

De este modo, las Cámaras de Comercio están en la obligación de mantener un control sobre el registro de los nombres independientemente de las actividades mercantiles de las personas, con el fin de evitar el uso de la homonimia y provocar posibles conflictos futuros. Para facilitar este proceso en el año 2000 se expide el Registro Único Empresarial (RUE) mediante la ley 590, constituyendo una iniciativa de integración de los servicios de registro de las cámaras de

comercio del país, unificando a nivel nacional su información, para poder inscribir, reportar y consultar el registro único empresarial desde cualquier cámara de comercio del país.

En cumplimiento del mandato legal se implementó el RUE, que entró en operación el 1 de enero de 2005, fecha a partir de la cual fue posible el control de homonimia a nivel nacional, pues con anterioridad a la operación de dicho registro cada Cámara de Comercio ejercía el control de homonimia de manera local, es decir, de acuerdo con la información que reposara en esa misma Cámara de Comercio (Superintendencia de Industria y Comercio, 2016, p. 6). Por tanto, es posible entender que las Cámaras de Comercio llevan un registro mercantil correspondiente a su jurisdicción, buscando siempre evitar la homonimia y mantener el control sobre la inscripción de los nombres.

Capítulo III

3. Metodología completa

3.1 Tipo y enfoque de investigación

3.1.1 Tipo de investigación.

Para el presente trabajo investigativo, se determina que el tipo de investigación se base en el bibliográfico documental, la cual es entendida como un procedimiento científico y sistemático de indagación, recolección, organización, análisis e interpretación de información o datos en torno a un determinado tema (Alfonso, 1995 citado por Morales, s.f., p.2). Dentro de esta metodología las fuentes principales de investigación están interrelacionadas por al tener como referentes de consulta, las normas, leyes, documentos impresos, electrónicos y audiovisuales y toda la jurisprudencia que se pueda consultar, sobre el tema de la homonimia y sus implicaciones legales en Colombia

En este sentido, el enfoque de la investigación es cualitativo ya que se harán uso de fuentes primarias, basadas en las experiencias reales de casos de algunas de las personas que han estado involucradas en procesos legales por la homonimia. Con esta ruta metodológica se pretende analizar y describir las diversas implicaciones legales de esta problemática en el país.

3.1.2 Enfoque de investigación.

Como método de investigación se opta por escoger la investigación de consulta bibliográfica, para lo cual el investigador propone crear una guía de consulta, como consecuencia de sus inferencias del conjunto de datos empíricos o de principios y leyes más generales, respecto al tema.

Las fuentes predominantes en la búsqueda de la información para el presente trabajo son las primarias, así mismo, la técnica utilizada es el análisis de contenido de textos bibliográficos.

3.2 Procedimiento metodológico

Con el fin de cumplir con los objetivos se plantea un proceso metodológico que consta del uso de técnicas como el análisis documental y de instrumentos como el fichaje, con las cuales se podrá determinar cuál es la responsabilidad legal que genera la homonimia para los colombianos.

- *Análisis documental:* con esta técnica se pretende recopilar y analizar la información que consta de la normatividad colombiana relacionada con la homonimia.
- *Fichaje:* con este instrumento se pretende clasificar los diversos los casos legales (casos de estudio) que se han presentado en el país sobre esto ubicados en la Fiscalía General de la Nación, juzgados o demás entidades de este carácter.

En este sentido, para aplicar estas técnicas e instrumentos de forma exitosa se plantea una serie de pasos basados en la metodología bibliográfica desarrollada por Alfonso (1995 citado por Morales, s.f., p.3-4), los cuales se deben aplicar para hacer este proceso más eficiente y conducente a resultados exitosos. Es decir:

- a. *Selección y delimitación del tema:* en esta fase decidió seleccionar el tema, por motivo personal del investigador, quien inocentemente, había sido implicado en un caso de homonimia, situación que le impidió, entre otros, su postulación a cargo público de Edil. Igualmente, se delimita, realizando la investigación sobre los casos más relevantes, presentados en el territorio colombiano.

- b. *Recolección de datos:* en esta fase se hará una recopilación de la información que, según un criterio inicial establecido, pudiera servir para el desarrollo de la investigación, es decir todos los aspectos, leyes, normal y demás que se relacionen con la homonimia en Colombia. Además de la identificación de casos de homonimia ubicados en la Fiscalía, por medio del fichaje.
- c. *Análisis de los datos:* en esta fase se hará análisis e interpretación de los datos hallados con el fin de halla la responsabilidad del Estado en este tema sus causas, consecuencias, sus implicaciones y su funcionamiento, tomando además como referencia distintos autores.
- d. *Redacción de la monografía o informe de la investigación y presentación final (oral y escrita):* en esta fase final cuando se haya dado respuesta a la pregunta que guio investigación y, en consecuencia, se da por culminada la investigación, se reelabora el esquema de la monografía y se inicia su redacción final.

3.3 Recursos

Dentro de los diferentes recursos que se usaran en la presente investigación tenemos:

3.3.1 Materiales.

Tabla 1.

Materiales.

DETALLE
Internet, Computador, impresora
Fotocopias, scanner

Teléfono, celular

Papel bon tamaño carta y oficio

Lapiceros, lápices

Cartulina para Empastes

Textos jurídicos, biblioteca virtuales

Fuente: Generación propia

3.3.2 Humanos.

Tabla 2.

Recursos humanos

DETALLE	UNIDAD
Tutor metodológico	1
Cotutor metodológico	1
Alumno investigador	1
Total recursos humanos	3

Fuente: Generación propia

Tabla 3.
Cronograma de actividades.

Actividades	Año 2018							Año 2019		
	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Abril	Mayo	Junio	Julio
Asesoría metodológica y técnica:										
Clasificación del material bibliográfico										
Tratamiento de la información: Clasificación de fuentes primarias, secundarias y terciarias.										
Desarrollo de contenidos para el anteproyecto										
Observaciones del Asesor al anteproyecto										

Desarrollo de contenidos y Diseño del anteproyecto			
Observaciones de asesor al anteproyecto			
Presentación del Proyecto			
Observación final del Asesor a la investigación			
Sustentación del trabajo final			

3.3.4 Presupuesto

Tabla 4.

Presupuesto del trabajo

DETALLE	COSTOS
Fotocopias, internet, impresiones, otros	\$ 145.000.00
Transportes	\$ 25.000.00
Transcripciones	\$ 40.000.00
Refrigerios	\$ 36.000.00

Empastes trabajo final	\$ 30.000.00
Impresión borradores y trabajo final	\$ 42.500.00
Asesoría metodológica	\$ 250.000.00
Asesoría técnica	\$ 50.000.00
Total presupuesto	\$ 618.500.00

Fuente: Generación propia

Capítulo IV

4. Recomendaciones Y Conclusiones

4.1 Recomendaciones

Se requiere de la cooperación interinstitucional, del Poder Judicial, Policía Nacional, el Ministerio Público Nacional de identificación y la Registraduría del Estado Civil, para crear o suscribir los convenios interinstitucionales, que conlleven al mejoramiento de la normatividad actual, en referencia a la homónima.

Se hace pertinente que las personas detenidas por casos de homonimia, las cuales aleguen ser víctimas de homonimia, permanezcan en las instalaciones de la Policía Nacional según su jurisdicción (hasta que un Juez, emita la resolución correspondiente o disponga alguna otra medida). Lo anterior para mitigar de alguna manera la situación de captura del sospechoso, en caso de ser totalmente inocente, por verse involucrado en un caso de homonimia.

Dado la ocurrencia en que los frecuentes errores cometidos en contra de homónimos, es de carácter procesal, y con el objeto de evitar perjuicios que pueden ir desde simples obstáculos en los trámites hasta sanciones severas dictadas por error, se citan algunos perjuicios ocasionados a los homónimos ajenos al, pues el índice de frecuentes errores procesales principalmente en materia penal y civil hacia homónimos ajenos a estas causas, pueden ser de algunos tipos, entre proceso los cuales destacan: Económicos: Cuando recaen en los bienes de un homónimo del sujeto al cual le siguen una causa civil, especialmente cuando dictan medidas cautelares como retenciones de cuentas en los bancos, prohibiciones de enajenar, arraigos, secuestros, embargos que incluso llegan al remate o subasta pública. Personales: Que se dan principalmente en procesos penales, como por ejemplo que se dicte orden de prisión preventiva en contra de una

persona ajena al proceso solo por tener nombres similares al imputado que se busca, esto incluso puede llevar a una condena de un inocente por falta de una regulación legal en materia procesal sobre casos de homonimia. Retardo en trámites: Estos casos de errores contra homónimos también afecta la tramitación de documentos o la solicitud de créditos a entidades financieras, por existir otra persona con nombres similares y a la cual se le han dictado medidas cautelares por deudas o comisión de delitos; un ejemplo claro es constar en la central de riesgos, siendo en realidad otra persona la que tiene causas por cobro de dinero o causas por insolvencia.

Dada la actual situación de la norma colombiana frente al tema de la homonimia, se sugiere realizar un proyecto de ley (en derecho comparado), para que se dicte la regulación del procedimiento para dicho caso, tal como existe en el hermano país del Perú, lo anterior en vista que al investigador le parece más completo en comparación de los demás países consultados sobre este tema en específico. Tenemos por ejemplo el Perú, donde el Congreso de la Republica. Creó la Ley No. 24711. Enero 27 de 2001. Diario oficial El Peruano. Pág. 197803; pepro para el caso que nos ocupa, se sugiere, la adaptación de la propuesta para proyecto de ley de homonimia, realizada por el Profesor ecuatoriano, Eddy Roberto Cumbajin Sánchez, en su Tesis Previa a la Obtención del Grado de Licenciado en Jurisprudencia, para ser implementado en Colombia (Ver anexo No. 1, al final de este trabajo).

Por ultimo, pero no menos importante, se sugiere seguir el epemplo de la republica del Perú, quienes ofrecen a los ciudadanos la posibilidad de obtener un certificado para evitar inconvenientes, por casos de homonimia, donde cualquier ciudadano puede solicitar una certificación, ante la posibilidad de tener problemas legales, impedimento de salida del país o embargo de cuentas bancarias por un caso de homonimia, para ello, pueden acudir al Poder

Judicial y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). REDACCIÓN PERÚ21 (2018)

Los pasos que debe seguir para tramitar estos certificados homónima, son los siguientes:

a. Ante EL RENIEC (Certificado de Nombres Iguales)

Para obtener el Certificado de Nombres Iguales del Reniec es necesario realizar el pago de S/ 4.10 en cualquier agencia del Banco de la Nación o Banco de Crédito del Perú.

Luego, el ciudadano, con su DNI, deberá hacer el trámite en cualquier agencia del Reniec.

El certificado tiene una vigencia de 30 días, contados a partir de la fecha que se emitió el documento. Cumplido este tiempo, el documento carecerá de valor.

*Si bien es cierto este documento posee solo valor informativo y no tiene el peso del Certificado de Homonimia que otorga el Poder Judicial, tenerlo en su poder podría ayudarlo a salir de alguna situación difícil.

b. Ante El Poder Judicial (Certificado de homonimia)

Para solicitar el certificado de homonimia del Poder Judicial, el ciudadano deberá pagar el 2% de la Unidad de Referencia Procesal (S/ 415), es decir S/ 8.30, en Banco de la Nación. Después, el siguiente paso será presentar lo siguiente en la oficina del PJ: recibo del pago original y copia, DNI original y copia, formato de solicitud.

De manera automática o en un día hábil, se califica si los requisitos solicitados son suficientes para dar por cumplido el trámite. Tras la calificación, el Registro Nacional Judicial se encarga de evaluar la solicitud y, finalmente, el Jefe del Registro Nacional Judicial es quien resuelve el trámite. REDACCIÓN PERÚ 21 (2018)

En estos casos, en los que una persona sea homónima de otra y que por dicha razón se vea inmersa dentro de un proceso penal por error, se puede solicitar al juez de tutela que ampare los derechos fundamentales que han sido vulnerados, para estos casos, se debe acudir a la Fiscalía General de la Nación sección denuncias o ante un Juez de la República.

1. Si se presenta una captura en estas condiciones, usted puede interponer la acción constitucional de habeas corpus: ¿Qué debo hacer si soy privado injustamente de la libertad o si mi detención se prolonga ilegalmente?

2. Usted puede interponer una acción de tutela por la vulneración de sus derechos fundamentales como por ejemplo al buen nombre, al habeas data, a la honra, al debido proceso, entre otros: ¿Cómo debo presentar una acción de tutela para proteger mis derechos fundamentales?

Recuerde que para que la tutela sea procedente se debe encontrar suficientemente probada la homonimia, de acuerdo con las pruebas aportadas dentro del proceso. Por lo tanto, es recomendable que presente todos los documentos que demuestren que es una persona diferente a la que realmente debe ser investigada o procesada, como, por ejemplo: Registro Civil en el que consten sus datos personales, certificaciones laborales, testimonios, entre otros.

Si el capturado se encuentra en centro penitenciario o carcelario es necesario poner en conocimiento de esta acción al INPEC.

3. Con la acción de tutela se pretende que se ordene al Juez Penal o al Fiscal del caso, que dentro del expediente se aclare que se ha presentado un error por homonimia con la persona que realmente cometió los delitos. En segundo lugar, que en las diferentes bases de datos (como por ejemplo las de la Policía Nacional, Procuraduría General de la Nación, Fiscalía, entre otras) se elimine cualquier información asociada con el ciudadano referente a tal proceso penal. Tomado de : <https://www.legalapp.gov.co> (2018)

4.2 Conclusiones

Teniendo en cuenta los hechos relatados, en las diferentes sentencias, corresponde a la Corte verificar si procede la acción de tutela y determinar si fueron vulnerados los derechos constitucionales al buen nombre, al *habeas data*, a la honra y al trabajo, de los ciudadanos colombianos que alegan no ser los autores de un delito por el cual son involucrados dentro de un proceso penal, por ser víctimas de un caso de suplantación. En caso de ser procedente la acción, será menester definir si se incurrió en una vulneración a los derechos fundamentales invocados por el accionante. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala, hará referencia a las siguientes cuestiones: (i) Procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, reiteración jurisprudencial; (ii) Caracterización del defecto fáctico como causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales; (iii) La jurisprudencia sobre las condiciones bajo las cuales es procedente la acción de tutela en casos de homonimia o suplantación de identidad en procesos penales y; (iv) El caso sujeto a análisis.

En de orden e ideas, dentro de los resultados hallados se refleja las necesidades que tiene la ciudadanía ante la figura del homónimo, puesto que está ocasionando problemas legales a personas inocentes, por la falta de precaución al momento de la expedición de medidas cautelares personales y reales, agravando la situación, el demorado proceso por parte de los

jueces , para verificar la verdadera identidad del sindicado, pese a rezar, en la reglamentación, “...debe ponerse en conocimiento ante el juez, en el menor tiempo posible).

Por otra parte, se pudo notar que el fenómeno de frecuencia de estos casos frente a personas inocentes, ha venido siendo menos frecuente, en comparación con la década anterior, lo que puede interpretarse, como los resultados de la implementación de los medios tecnológicos en Registradurías y demás dependencias del estado, en cuanto al cruce de información, lo cual demuestra, una verdadera colaboración entre los organismos de control del estado mismo.

En el caso específico del investigador (José Antonio López Barbosa), quien alrededor del año 2016 estuvo envuelto en un caso de homonimia, ya que para el 2011 el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Buga había generado una orden de captura por el tráfico de estupefacientes. Sin embargo, tras el proceso el acusado decidió realizar una acción de tutela con el fin de esclarecer los hechos pues su cedula no coincidía con la persona buscada. De este modo, las entidades involucradas como el Departamento de Policía Valle SIJIN constataron que al respecto hubo error, el cual procedió a corregir, por lo que en la actualidad aparecen con asuntos pendientes con las autoridades judiciales (Ver anexo No. 2).

En referencia al caso del Sr. Reinaldo de Jesús Becerra de Bogotá, quien fue condenado en un proceso penal sin que mediara una debida individualización, se concluyó que se estaba ante un caso de homonimia donde su persona había sido confundida por el nombre y se procedió a su darle su libertad, quien entabló demanda contra el estado por daños y perjuicios.

Igualmente, para el Sr. Jorge Enrique Briceño Suarez fue arrestado por la Fiscalía General de la Nación en 2005, en cumplimiento de una orden de captura proferida por la Unidad Nacional de Derechos Humanos ya que se identificaba con el alias de Mono Jojoy, reconocido integrante de las FARC. Sin embargo, tras el reconocimiento de que hay un caso de homonimia

la Fiscalía General de la Nación no había desarrollado las actuaciones judiciales tendientes a restablecer el buen nombre y la dignidad del actor, quien también entabló la demanda respectiva.

Para la Señora Aura Cely Rojas Rojas que presentó ante el CAP de Tuluá del ISS, la documentación requerida para obtener el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a la que considera tener derecho. Aun no se le hace efectivo el reconocimiento y pago de su mesada pensional y las autoridades (al cierre de esta investigación), siguen investigando el caso, pues a un no tienen responsables.

El caso del profesor Juan Alberto Jiménez Díaz quien interpuso acción de tutela contra la Dirección Seccional de Fiscalías de Cartagena ya que el señor quien en el año 2012 trabajaba para una institución educativa que le pidió que allegara los certificados de antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales, con el fin de actualizar la base de datos y las hojas de vida del personal de la entidad para el año 2013. Ya ejerce como fiscal dela Junta de padres de familia del colegio donde inicialmente se le negó su ingreso por el caso de homonimia.

El caso del Sr. Mauricio Vargas Espinosa quien en el año 2003 se acercó a las instalaciones del DAS con el fin de refrendar su pasado judicial, donde se enteró de que su nombre aparecía vinculado a la prosecución de un proceso penal en la ciudad de Medellín y que había sido condenado a pena privativa de la libertad por los delitos de hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas de fuego. Hoy se encuentra demandando al estado, por reparo a su buen nombre.

Referencias

Aguilar, V. (2007). *Derecho civil: parte general*. Ciudad de Guatemala, Guatemala: Ed.

Litografía Orión.

Aristizábal, K., Alvarado, Á., Anaya, E., Becerra, J. y Escárraga, A. (2014). Alcance del derecho a la información de los medios de comunicación masivos frente al debido proceso de los implicados penalmente. *Jurídicas CUC*, 10 (1), 197 – 232.

Cabanellas, T. (2009). *Diccionario jurídico elemental*. Buenos Aires, Argentina: Heliasta.

Cámara de Comercio de Bogotá. (s.f.) *¿Cuándo se considera que hay homonimia?* Recuperado de <https://www.ccb.org.co/Preguntas-frecuentes/Registros-Publicos/Cuando-se-considera-que-hay-homonimia>

Cámara de Comercio de Medellín. (2010). *Guía de trámites legales para la constitución y funcionamiento de empresas en Medellín*. Medellín, Colombia: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Recuperado de http://www.camaramedellin.com.co/site/Portals/0/Documentos/2011/tramites_constitucion_empresa_empresas.pdf

Corte Constitucional. (1991). *Constitución Política De Colombia*. Recuperado de http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html#1

Corte Constitucional. (2002). *Sentencia T-744/02*. Recuperado de <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/T-744-02.htm>

Corte Constitucional. (2010). *Sentencia T-578/10*. Recuperado de <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-578-10.htm>

Corte Constitucional. (2011). *Sentencia T-014/11*. Recuperado de

<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/T-014-11.htm>

Corte Constitucional. (2014). *Sentencia T-653/14*. Recuperado de

<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-653-14.htm>

Corte Constitucional. (2010). *Sentencia T-578/10*. Recuperado de [https://corte-](https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-217963361)

[constitucional.vlex.com.co/vid/-217963361](https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-217963361)

Corte Constitucional. (2003). *Sentencia T-949/03*. Recuperado de [https://corte-](https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-43620584)

[constitucional.vlex.com.co/vid/-43620584](https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-43620584)

Corte Constitucional. (2016). *Sentencia T-036/16*. Recuperado de

<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-036-16.htm>

Corte Constitucional. (2007). *Sentencia T-558/07*. Recuperado de

<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/T-558-07.htm>

Corte Suprema de Justicia. (2016). *Radicación No 86036*.

Cumbajin, E. (2011). *Vulneración del derecho constitucional a la identidad individual por inexistencia de regulación legal de los casos de homonimia*. Tesis de pregrado. Loja, Ecuador: Universidad Nacional de Loja.

El Tiempo. (2017). *Pesadilla por un homónimo*. Recuperado de

<http://www.eltiempo.com/opinion/editorial/pesadilla-por-un-homonimo-caso-de-johana-milena-ospina-98278>

- Galiano, G. (2013). Reflexiones conceptuales sobre las categorías: persona, personalidad, capacidad y sujeto de derecho. *Derecho y Cambio Social* 10(31). Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5490737>
- Garfias, I. (1991). *“Derecho Civil”, Primer Curso, Parte general, Personas, Familia*. Ciudad de México, México: Editorial Porrúa.
- López, N. (s.f.). *La homonimia de las sociedades comerciales*. Recuperado de <http://www.vll.com.uy/blog/la-homonimia-de-las-sociedades-comerciales/>
- Medina, J. (2017). *Derecho Civil. Aproximación al Derecho. Derecho de personas: Quinta edición*. Bogotá, Colombia: Editorial Universidad del Rosario.
- Morales, O. (s.f.). *Fundamentos de la investigación documental y la monografía*. Recuperado de <http://webdelprofesor.ula.ve/odontologia/oscarula/publicaciones/articulo18.pdf>
- Moro, T. (1999). *Diccionario Jurídico Espasa*. Madrid, España: Ed. Espasa Calpe.
- Organización de Estados Americanos (OAS). (s.f.). *Código Civil Colombiano*. Recuperado de https://www.oas.org/dil/esp/codigo_Civil_Colombia.pdf
- Presidencia de la República. (1970). *Decreto 1260 de 1970*. Recuperado de https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/decreto_1260_de_1970.pdf
- Presidencia de la República. (1970). *Decreto 410 de 1971*. Recuperado de http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_comercio.html#1
- Presidencia de la República. (1971). *Decreto 410 de 1971*. Recuperado de http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_comercio.html

Presidencia de la República. (2015). *Radicado 16-063215- -00002-0000*. Recuperado de

<http://www.confecamaras.org.co/Documentos/DireccionJuridica/ConceptosDoctrinaJurisprudencia/con2704INT.pdf>

Procuraduría General de la Nación. (2016). *Derecho al buen nombre y habeas data - Marco*

constitucional, legal y jurisprudencial. Reglas para verificar su afectación. Recuperado de [https://www.procuraduria.gov.co/relatoria/media/file/flas_juridico/1386_CE-Rad-2015-00506-01\(AC\).pdf](https://www.procuraduria.gov.co/relatoria/media/file/flas_juridico/1386_CE-Rad-2015-00506-01(AC).pdf)

Rodríguez, D., y Valdeoriola, J. (2009). *Metodología de la investigación*. Cataluña, España:

Universidad Abierta de Cataluña.

Sánchez, F. (2015). *Daños y perjuicios ocasionados a los ciudadanos, por la emisión de medidas*

cautelares personales y reales, ante la figura del homónimo. Tesis de pregrado. Santo Domingo, Ecuador: Universidad Regional Autónoma De Los Andes

Sánchez, F. (2015). *Daños y perjuicios ocasionados a los ciudadanos, por la emisión de medidas*

cautelares personales y reales, ante la figura del homónimo. Tesis de grado. Santo Domingo, Ecuador: Universidad Regional Autónoma De Los Andes. Recuperado de <http://dspace.uniandes.edu.ec/bitstream/123456789/2100/1/TUSDAB042-2015.pdf>

Vargas Hernández Clara Inés. Sentencia T – 437 de 2004. M.P. Derecho al Buen Nombre. Pág.

26

Superintendencia de Industria y Comercio. (2016). *Decreto 1074 de 2015*. Recuperado de

[http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=4751&name=Decreto1074_2015_\(1\).pdf](http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=4751&name=Decreto1074_2015_(1).pdf)

Tribunal Superior De Pereira. (2017). Sentencia T1ª 00049/17. Recuperado de

http://www.tribunalsuperiorpereira.com/Relatoria/2017/Sala_Civil-

Familia/Dr._S%C3%A1nchez_Calamb%C3%A1s/02.Febrero/Constitucionales/T1%C2%AA%2000049%20Santiago%20Benav%C3%ADdes%20vs%20PGN%20y%20Registradur%C3%ADa%20Nal.%20Inmediatez%20y%20subsidiaridad.%20Improcedente%C2%B4.docx

Valencia, A. (1981). *Parte general y personas*. Bogotá, Colombia: Ed. Temis.

Villagran, M. (2012). *La institución jurídica del nombre, el fenómeno de la homónima y sus implicaciones jurídicas*. Tesis de pregrado. San Carlos, Guatemala: Universidad San Carlos de Guatemala.

Anexos

Anexo No. 1**Propuesta para proyecto de ley de homonimia en Colombia****PROPUESTA DE LEY****(Agosto 07/2019)***Por el cual se expide la ley de Homonimia***EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,**

en uso de las facultades que le confiere el literal a) del artículo transitorio 5, del Capítulo 1 de las disposiciones transitorias de la Constitución Política de Colombia, previa consideración y no improbación por la Comisión especial,

Considerando: - Que, tal como lo determina el Artículo 15. De la Constitución colombiana, Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. Que, la falta de una Ley que regule los casos de homonimia permite que personas ajenas a un proceso se vean afectadas de distintas maneras vulnerando su derecho a la Identidad Individual consagrado en la Constitución de la República de Colombia. - Que, es necesario la creación de un sustento normativo para que la disposición contenida en el Art. 15 de la CN. que habla acerca del derecho de la Identidad Individual se encuentre legalmente garantizado y regulado. En uso de las atribuciones que le confiere el 114. Corresponde al Congreso de la República reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer control político sobre el gobierno y la administración de la Constitución de la República de Colombia,

RESUELVE:**CRÉESE LA SIGUIENTE LEY:**

LEY de homonimia LEY QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO EN LOS CASOS DE HOMONIMIA CAPÍTULO I GENERALIDADES

Artículo 1.- Objeto de la ley La presente Ley tiene por finalidad regular el procedimiento judicial en los casos de homonimia, cuando quien lo solicita se encuentra privado de su libertad en mérito de una orden judicial. Así mismo regula el procedimiento administrativo para quien estando en libertad quiera desvirtuar la existencia de un posible caso de homonimia respecto de su persona.

Artículo 2.- Homonimia Existe homonimia cuando una persona detenida o no tiene los mismos nombres y apellidos de quien se encuentra requerido por la autoridad competente.

CAPÍTULO II

PROCEDIMIENTO JUDICIAL DE HOMONIMIA

Artículo 3.- Datos de identidad del requerido El mandato de detención dictado por el órgano jurisdiccional deberá contener, a efecto de individualizar al presunto autor, los siguientes datos del requerido: a) Nombres y apellidos completos. b) Edad. c) Sexo. d) Fecha y lugar de nacimiento. e) Cedula de Identidad. f) Domicilio. g) Fotografía, de ser posible. h) Características físicas, talla y contextura. i) Cicatrices, tatuajes y otras señas particulares. j) Nombre de los padres. k) Grado de instrucción. l) Profesión u ocupación. m) Estado civil. n) Nacionalidad. En caso de desconocerse algunos de los datos de identidad personal, debe expresarse esta circunstancia en el mandato de detención, a excepción de los indicados en los incisos a), b), c) y h) que serán de obligatorio cumplimiento, bajo responsabilidad. Cuando la orden de captura o requisitoria emitida por el órgano jurisdiccional no contenga los datos de obligatorio cumplimiento del requerido, la Policía Nacional deberá solicitar en forma inmediata la correspondiente aclaración al órgano jurisdiccional respectivo. Fuera de dichos casos no opera esta facultad.

Artículo 4.- De la intervención policial Para la detención de una persona requerida, la Policía Nacional deberá identificarla fehacientemente y verificar los datos de identidad establecidos en el Artículo 3 y de ser factible acompañar una fotografía, los cuales deberán estar consignados en el parte policial elaborado en la investigación previa al proceso penal, bajo responsabilidad funcional. así mismo tomará la identificación dactiloscópica del requisitoriado. La Policía Nacional solicitará al Registro Civil que se informe sobre la existencia de personas homónimas al requerido.

Artículo 5.- De la competencia Si la orden de detención se ejecuta en el mismo lugar de la sede del órgano jurisdiccional que la dictó, será competente el Juez que se encuentre conociendo el proceso penal. Si la detención se verifica en lugar distinto a la jurisdicción del juez que emitió el mandato de detención, será competente el Juez Penal de Turno Permanente del lugar en el que se produjo la detención, quien deberá solicitar a la autoridad correspondiente que se le proporcione copia del oficio que dispone la ejecución de detención del requerido. Dicho documento deberá consignar debidamente todos los datos a que se refiere el Artículo 3, pudiendo solicitar las piezas pertinentes al órgano jurisdiccional que viene conociendo el proceso penal cuando no es suficiente el mandato de detención expedido por el Juez de origen. El Juez resolverá la solicitud de homonimia del detenido en el plazo máximo de 24 horas, bajo responsabilidad, disponiendo las diligencias que considere necesarias para el esclarecimiento del pedido.

Artículo 6.- Disposición del detenido El detenido que alegue ser homónimo de un requerido deberá ser puesto a disposición del Juez Penal respectivo, dentro de las veinticuatro horas o en el término de la distancia, a fin de que resuelva si es la persona sujeta a mandato de detención.

Artículo 7.- Pruebas que sustentan la homonimia El detenido que alegue homonimia deberá presentar al Juzgado las pruebas necesarias para acreditar su verdadera identidad, las mismas que se confrontarán con los datos relativos a la persona requerida. Se podrá presentar como prueba el cotejo de las impresiones dactiloscópicas del detenido y del requerido.

Artículo 8.- Coordinación con la Policía Judicial y con el Registro Civil. El Juez que tenga a su cargo el proceso de homonimia deberá solicitar la información necesaria al Registro Civil para resolver la solicitud de homonimia, la cual deberá ser proporcionada en el día.

Artículo 9.- Declaración fundada de la solicitud de homonimia Si el Juez declara fundada la solicitud de homonimia, dispondrá la inmediata libertad del detenido. Cuando la libertad es ordenada por el Juez distinto al que emitió el mandato de detención, remitirá el incidente para que se acumule al principal. Los procesos en los cuales se declare fundada la solicitud de homonimia no traen como consecuencia la suspensión del proceso penal, ni afectan la orden de detención dictada por el Juez de origen. La resolución que declara fundada la solicitud de homonimia se remitirá a la Oficina de la Policía Judicial, a fin que expida el correspondiente Certificado de Homonimia en forma gratuita en favor del interesado.

Artículo 10.- Declaración infundada de la solicitud de homonimia Si el Juez declara infundada la solicitud de homonimia, dispondrá la prosecución del proceso penal a su cargo o que el detenido sea puesto a disposición del Juez que emitió el mandato de detención.

Artículo 11.- Apelación de resoluciones La resolución que dicte el Juez sobre el pedido de homonimia es apelable en el plazo máximo de tres días de notificada, la cual será resuelta por el órgano jurisdiccional superior, en un plazo que no excederá de 24 horas. La resolución que ordene la libertad del detenido se ejecutará aun cuando se interponga apelación contra ésta.

Artículo 12.- Libertad sin pronunciamiento Excepcionalmente y en casos debidamente justificados, cuando no se determine la homonimia dentro del plazo señalado en la presente Ley, el Juez dispondrá la inmediata libertad del detenido, salvo en los casos sobre delitos de terrorismo, terrorismo especial, traición a la patria, espionaje y tráfico ilícito de drogas. Lo dispuesto en el presente artículo se aplicará sin perjuicio de que el Juez competente practique las diligencias ampliatorias que considere pertinentes y resuelva en el plazo de cinco días, computado desde la fecha de decretada la libertad. Durante este período, el Juez podrá adoptar las acciones necesarias a fin de garantizar que la persona no eluda el proceso, pudiendo dictar medidas cautelares, de conformidad con el Artículo 160 del Código Procesal Penal.

Artículo 13.- Casos especiales El plazo establecido en el Artículo 6 no se aplicará en los casos de terrorismo, terrorismo especial, traición a la patria, espionaje y tráfico ilícito de drogas, salvo que el Juez Penal respectivo asuma jurisdicción antes de que venza el plazo de detención preventiva fijado para este tipo de delitos.

CAPÍTULO III

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE HOMONIMIA

Artículo 14.- Solicitud del Certificado de Homonimia El ciudadano que tenga conocimiento de la existencia de un posible caso de homonimia respecto a su persona podrá solicitar el Certificado de Homonimia al Registro Civil acompañando los documentos que acrediten su identidad personal, así como los demás que estime conveniente para acreditar su pedido. El pedido del Certificado de Homonimia en libertad es un procedimiento preventivo que no requiere la existencia de un mandato de detención en contra de una persona del mismo nombre y apellido, sino que se tramita con el objeto de garantizar el derecho a la libertad individual y al libre tránsito, frente a cualquier

eventualidad. La persona que solicite la referida constancia deberá dejar su impresión dactiloscópica, a fin de que se realice el cotejo respectivo.

Artículo 15.- Plazo para resolver el pedido de homonimia El Registro Civil resolverá el pedido de homonimia en el plazo de tres días hábiles, basado en los documentos presentados por el recurrente, la 95 información proporcionada por el Registro civil, así como otros que requiera su pronunciamiento. La declaración de homonimia deberá ser inscrita en el Registro Civil obligatoriamente.

CAPÍTULO IV

DEL CERTIFICADO DE HOMONIMIA

Artículo 16.- Certificado de Homonimia y validez jurídica El Certificado de Homonimia es el único documento público con validez jurídica, que acredita si una persona registra o no homonimia y es expedido por el Registro Civil.

Artículo 17.- Tasa por servicios administrativos La persona que solicita el Certificado de Homonimia expedido por el Registro Civil abonará el pago correspondiente por dicho concepto.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS Y FINALES

Primera. - De la cooperación institucional El Poder Judicial, la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Registro Civil, suscribirán los convenios que correspondan para la mejor aplicación de la presente Ley.

Segunda. - De los detenidos Los requeridos detenidos sujetos a procedimiento de homonimia deberán permanecer en los ambientes de la Policía Judicial hasta que el Juez emita la resolución correspondiente, o disponga alguna otra medida.

Tercera. - Transferencia de información La transferencia de información requerida para el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 8 de la presente Ley se efectuará a través de los sistemas de transferencia de información que se acuerden en los convenios de cooperación institucional.

Cuarta. - De la proporción de información Todo organismo público o privado deberá proporcionar y suministrar, en el día, la información necesaria al Poder Judicial, para el cumplimiento de la presente Ley, bajo responsabilidad.

Quinta. - De la vigencia de la Ley La presente Ley entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Registro Oficial.

Sexta. - Deroga normas legales Deróguense todas aquellas normas legales que se opongan a la presente Ley.

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.

El Presidente del Senado.

El Presidente de la Cámara de Representantes,

El Secretario del Senado,

El Secretario de la Cámara de Representantes,

El Ministro de Justicia,

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

El Ministro de Defensa,

República de Colombia. - Gobierno Nacional.

Dada en Bogotá, D.E., a 07 de agosto de 2019.

Publíquese y ejecútese.

Anexo No. 2**Sentencia STP 7863-2016****CORTE SUPREMA DE JUSTICIA****SALA DE CASACIÓN PENAL SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS No. 3****JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA****Magistrado Ponente****STP 7863-2016****Radicación No 86036****(Aprobado Acta No. 171)**

Bogotá, D.C., siete (7) de junio de dos mil dieciséis (2016).

Decide la Sala la impugnación interpuesta por JOSÉ ANTONIO LÓPEZ BARBOSA, contra el fallo proferido el 27 de abril de 2016, por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, mediante el cual denegó el amparo de los derechos fundamentales invocados, supuestamente vulnerados por el Juzgado Segundo Penal del Circuito, el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, ambos de Buga, la Dirección de Investigación Criminal DIJIN e INTERPOL y la Dirección Departamental de la Policía Nacional.

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

Así fueron sintetizados los fundamentos de la acción en el fallo constitucional de primera instancia: Manifiesta el accionante que a su nombre y número de cédula aparece registrada condena por

delito de tráfico de estupefacientes, la que mediante auto del 24 de agosto de 2011, el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Buga declaró extinguida por muerte del condenado en el proceso 200700217; en el Centro de Servicios de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Buga constató que el condenado fue el señor JOSÉ ANTONIO LÓPEZ BARBOSA identificado con cédula de ciudadanía No. 1.116.066.823, persona diferente a él, pues el número de su cédula es 72.008.741, y que la sentencia la profirió el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Buga el 29 de noviembre de 2011. Solicita se ordene suprimir la información negativa a su nombre¹.

EL FALLO IMPUGNADO

La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga negó, por carencia actual de objeto, el amparo solicitado porque “el problema que motivó al actor a incoar la acción de tutela fue que a su nombre y número de cédula de ciudadanía aparecía registrada sentencia condenatoria por el delito de tráfico de estupefacientes, pero esa situación está superada, ya que el Departamento de Policía Valle SIJIN constató que al respecto hubo error, el cual procedió a corregir, razón por la cual en la actualidad al solicitarse antecedentes del actor por la web, aparece que “No tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales”. En consecuencia, ha cesado la causa que generó la presentación de la acción de tutela, por tanto, ninguna utilidad reportaría una orden judicial, aún en el caso de que la llamada estuviese llamada a prosperar, pues la misma no tendría el poder de modificar la situación ya superada².”

LA IMPUGNACIÓN

El accionante impugnó el fallo, explicando que, si bien el juez de primera instancia negó por improcedente el amparo, ante la carencia actual de objeto, “también es cierto que nos encontramos ante un daño consumado con respecto a los derechos fundamentales a la honra, al derecho a elegir y a ser elegido, y al buen nombre. Esto quiere decir, que el juez de tutela, debió hacer, en la parte

¹ Fl. 113

² Fl. 154

motiva de la sentencia, un análisis serio en el que demuestre la existencia de un verdadero perjuicio irremediable, al cabo del cual, podrá, en la parte resolutive, al declarar la improcedencia de la acción, sin hacer un análisis de fondo, de conformidad con la Sentencia T-358 de 2014³”.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. De acuerdo con la preceptiva del artículo 1° del Decreto 1382 del 12 de julio de 2000, es competente esta Sala para pronunciarse sobre la impugnación interpuesta contra la decisión proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga. 2. El artículo 86 de la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho a promover acción de tutela ante los jueces con miras a obtener la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando por acción u omisión le sean vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública o por particulares en los casos previstos de forma expresa en la ley, siempre que no exista otro medio de defensa judicial, o existiendo, cuando la tutela se utilice como mecanismo transitorio para evitar la materialización de un perjuicio irremediable. En diferentes oportunidades, la Sala ha precisado que el mecanismo mencionado no se encuentra diseñado con miras a reemplazar a las autoridades competentes, de ahí que no sea de recibo cuando se advierte que el accionante, cuenta con otro medio judicial para invocar la protección de los derechos fundamentales, requisito de procedibilidad que se encuentra estatuido en el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991. La anterior consideración sólo admite, como excepción, la intervención para evitar la consumación de un perjuicio irremediable, pues de no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones estatales, propiciándose, un desborde institucional en perjuicio de la administración de justicia y del Estado social de derecho. 3. El fenómeno de la carencia actual de objeto tiene como característica esencial que la orden del juez de tutela no surtiría ningún efecto, esto es, caería en el vacío. Para la jurisprudencia constitucional, lo anterior se presenta, generalmente, a partir de dos eventos: el hecho superado o el daño consumado. La carencia actual de objeto por hecho superado, se da cuando entre el momento de la interposición de la acción de

³ Fl. 173

tutela y el momento del fallo, se satisface por completo la pretensión contenida en la demanda de amparo, razón por la cual cualquier orden judicial se torna innecesaria. Por su parte, la carencia actual de objeto por daño consumado, se presenta cuando la vulneración o amenaza del derecho fundamental ha producido el perjuicio que se pretendía evitar con la acción de tutela, de modo tal que ya no es posible hacer cesar la violación o impedir que se concrete el peligro, y lo único que procede es el resarcimiento de daño causado por la vulneración del derecho fundamental. En sentencia T-858 de 2010, la Corte Constitucional recordó que la acción de tutela tiene un carácter eminentemente preventivo más no indemnizatorio, por lo que su fin es que el juez de tutela, previa verificación de la existencia de una vulneración o amenaza de un derecho fundamental, dé una orden para que el peligro no se concrete o la vulneración concluya; sólo excepcionalmente se permite ordenar algún tipo de indemnización. En dicha providencia se precisó que “en caso de que se presente un daño consumado, cualquier orden judicial resultaría inocua o, lo que es lo mismo, caería en el vacío pues no se puede impedir que se siga presentando la violación o que acaezca la amenaza. La única opción posible es entonces la indemnización del perjuicio producido por causa de la violación del derecho fundamental, la cual, en principio, no es posible ordenar mediante la mencionada vía procesal”. Ahora bien, en Sentencia T-358 de 2014, la Corte Constitucional señaló: Cabe preguntarse cuál es la conducta a seguir por parte del juez de tutela en el caso en el que se verifique la existencia de un verdadero daño consumado teniendo en cuenta que, como se dijo, cualquiera de sus órdenes sería inocua. Para responder a este interrogante, la jurisprudencia constitucional ha indicado que es necesario distinguir dos supuestos. El primero de ellos se presenta cuando al momento de la interposición de la acción de tutela el daño ya está consumado, caso en el cual ésta es improcedente pues, como se indicó, tal vía procesal tiene un carácter eminentemente preventivo mas no indemnizatorio. A ello se refiere el artículo 6, numeral 4, del Decreto 2591 de 1991 cuando indica que “la acción de tutela no procederá (...) cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado (...)”. Esto quiere decir que el/la juez/a de tutela deberá hacer, en la parte motiva de su sentencia, un análisis serio en el que demuestre la existencia de un verdadero daño consumado, al cabo del cual podrá, en la parte resolutive, declarar la improcedencia de la acción, sin hacer un análisis de fondo. Adicionalmente, si lo considera pertinente, procederá a compulsar copias del expediente a las autoridades que considere obligadas a investigar la conducta de los/las demandados/as cuya acción u omisión causó el daño e informar al actor/a o a sus familiares sobre las acciones jurídicas de toda índole a las que puede acudir para

el resarcimiento del daño. (Se resalta) Análisis del caso concreto 1. A voces del art. 32, inc. 2° del Decreto 2591 de 1991, el juez que conozca de la impugnación estudiará el contenido de la misma, cotejándolo con el acervo probatorio y con el fallo. Si, a su juicio, la sentencia carece de fundamento, procederá a revocarla; si la encuentra ajustada a derecho, la confirmará. 2. De las pruebas obrantes en el expediente se observa lo siguiente: a. Mediante sentencia del 29 de noviembre de 2007, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Buga, condenó a JOSÉ ANTONIO LÓPEZ BARBOSA, identificado con C.C. 1.116.066.823, a la pena principal de treinta y dos (32) meses de prisión, por la conducta punible de tráfico de estupefacientes. El juzgado libró las respectivas comunicaciones a la Procuraduría General de la Nación y a la Registraduría Nacional del Estado Civil⁴. A través de auto del 22 de agosto de 2011, el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Buga, declaró la extinción de la sanción penal, por muerte, de JOSÉ ANTONIO LÓPEZ BARBOSA, con C.C. 1.116.066.823⁵. c. De conformidad con la respuesta suministrada por el Comandante del Departamento de Policía del Valle del Cauca, consultada la base de datos de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, a nombre del accionante, JOSÉ ANTONIO LÓPEZ BARBOSA, identificado con C.C. 72.008.741, aparece el siguiente registro: “Juzgado Ejecución de Penas y Medidas de Buga, Valle del Cauca, en oficio 430 del 24 de agosto de 2011, comunica extinción de condena. Extinción por muerte. Proceso o sumario 200100217 por tráfico de estupefacientes”. Agregó que “El día 21 de abril del presente año se recibe copia por parte del Juzgado 2° Penal del Circuito (...) con dicha documentación se confirmó que efectivamente la extinción de la condena figuraba al cupo numérico 1.116.066.823 y no al cupo numérico 72.008.741, por tal motivo se procedió a realizar el respectivo cambio en el sistema quedando resuelto el motivo de la presente acción. Prueba de ello, al momento de generar los antecedentes judiciales en línea a través de la página web de la Policía Nacional, el señor JOSÉ ANTONIO LÓPEZ BARBOSA, identificado con cédula de ciudadanía 72.008.741 le indica que NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES, de acuerdo a lo dispuesto por la H. Corte Constitucional en Sentencia SU-458 de 2012” 6. 3. Pues bien, de los antecedentes reseñados es posible observar que la Policía Nacional, registró en el cupo numérico del accionante, JOSÉ ANTONIO LÓPEZ BARBOSA, identificado con C.C. 72.008.741 de

⁴ Fls. 55-57 b.

⁵ Fl. 103

Barranquilla, los datos de la providencia emitida por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Buga, mediante la cual ordenó la extinción de la condena impuesta a JOSÉ ANTONIO LÓPEZ BARBOSA, con C.C. 1.116.066.832 de Buga, afectando con ello sus derechos fundamentales al buen nombre, honra y habeas data. En efecto, este último derecho, en su dimensión positiva, comprende la garantía de que la información contenida en los archivos de información o en las bases de datos sea correcta, completa y actualizada. Por ello, le asiste razón al demandante cuando se queja de la existencia en el certificado de antecedentes judiciales, de una sentencia condenatoria proferida contra un sujeto distinto a él, pues aunque aquél no figuró como sujeto o parte procesal dentro de la actuación penal que se adelantó contra su homónimo -ya que hubo plena identificación del autor de los delitos referidos,- se presentó una irregularidad imputable a los administradores de las bases de datos, lo que conllevó a que durante casi cuatro años existiera una información falsa sobre su situación jurídica. Sobre esto, la Corte Constitucional, en Sentencia T-744 de 2002, señaló: Los registros de antecedentes criminales, aparte de las afectaciones al buen nombre y a la honra de las personas, pueden generar igualmente consecuencias adversas cuando se trata de valorar en un proceso penal la buena conducta anterior, o dosificar la pena, pues es indudable el efecto negativo que para la persona tiene el que se le considere reincidente en la comisión de delitos. En tal virtud, si el registro de antecedentes constituye problema grave y trascendental para quien realmente lo merece, con mayor razón ha de ocasionar perjuicios o lesionar a quien habiendo sido víctima del uso de su nombre por persona distinta, con fines ilícitos, debe cargar injusta e ilegítimamente con las consecuencias de tal registro. Ahora bien, de acuerdo con la información suministrada por el Comandante del Departamento de Policía del Valle del Cauca, el 21 de abril de 2016, se realizó la respectiva eliminación de la información errónea del sistema, de modo que, en la actualidad, al consultar los antecedentes judiciales del actor, se evidencia que no tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales. Por tanto, es claro que se está frente a un hecho superado con respecto a la vulneración invocada, toda vez que la situación expuesta en la demanda, que había dado lugar a que el afectado intentara la acción, ha cesado, en consecuencia, el juez queda imposibilitado para emitir orden alguna de protección de los derechos fundamentales. Tal como se estableció en precedencia, la carencia actual de objeto por hecho superado se da cuando entre el momento de la interposición de la acción de tutela y el momento del fallo, se satisface por completo la pretensión contenida en la demanda de amparo, razón por la que cualquier orden judicial se torna innecesaria en este caso.

Por este motivo, se confirmará el fallo de primera instancia. 4. Con todo, la Corte no puede pasar por alto que el registro de antecedentes penales tiene la potencialidad de generar consecuencias adversas para las personas, por ejemplo, cuando se trata de competir en el mercado laboral en igualdad de condiciones; para el ejercicio del derecho de locomoción; o incluso para acceder a cargos públicos o de elección popular. En ese sentido, si el registro de antecedentes puede ser fuente de serias limitaciones a los derechos de quien realmente ha incurrido en conductas punibles, “con mayor razón ha de ocasionar perjuicios o lesionar a quien debe cargar injusta e ilegítimamente con las consecuencias de tal registro”⁶. En el presente caso, no puede pasarse por el alto que en el escrito de tutela, el demandante explicó que la irregularidad denunciada, impidió que integrara la lista de elegibles conformada por el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, para los comicios electorales llevados a cabo el 25 de octubre de 2015, lo que le generó un daño consumado frente a sus derechos a la honra, al buen nombre, a elegir y a ser elegido; precisamente porque la supuesta condena existente en su contra, lo obligó a retirarse de las elecciones, aunque había obtenido el aval para participar⁷. Daño que, como es evidente, no estaba en la obligación de soportar, ya que se vio expuesto a un señalamiento público indebido; a tener que renunciar al aval otorgado para integrar la lista de candidatos a la Junta Administradora Local de la Comuna Norte Centro Histórico de Barranquilla; y a no poder ejercer sus derechos civiles a través de su participación en la actividad política. Sentencia T-949 de 2003⁸. Estas circunstancias, sin embargo, impiden el fin primordial del amparo, cual es la protección inmediata de los derechos fundamentales para evitar precisamente los daños que dicha violación puede generar y no, una protección posterior a la consumación de los hechos, cuyo amparo, de perseguirse, debe ser objeto de una acción indemnizatoria a través de otros mecanismos judiciales de defensa⁹. 5. Por último, se prevendrá a la Policía Nacional que en el futuro se abstenga de incurrir en este tipo de irregularidades vulneratorias de los derechos fundamentales de los ciudadanos, ejerciendo un análisis más cuidadoso y preciso de la información que administra en las diferentes bases de datos de registros delictivos e identificación nacionales. Por lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL – EN SALA DE DECISIÓN DE ACCIONES DE

⁶ Sentencia T-949 de 2003

⁷ Fl. 14

⁸ FL 15

⁹ Sentencia T-498 de 2000

TUTELA, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 10 Sentencia T-498 de 2000

RESUELVE

CONFIRMAR el fallo impugnado.

PREVENIR a la Policía Nacional que se abstenga de incurrir en este tipo de irregularidades vulneratorias de los derechos fundamentales de los ciudadanos, ejerciendo un análisis más cuidadoso y preciso de la información que administra en las diferentes bases de datos de registros delictivos e identificación nacionales.

NOTIFICAR esta providencia de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, una vez en firme.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA

EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER

PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA

Secretaria